



**Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
GENERAL

CCPR/C/84/Add.2
22 de febrero de 1995

ESPAÑOL
Original : RUSO

COMITE DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40 DEL PACTO

Cuartos informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 1993

Adición

FEDERACION DE RUSIA*

[27 de septiembre de 1994]

* Para el informe inicial presentado por el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, véase el documento CCPR/C/1/Add. 22; para el examen del informe por el Comité, véanse los documentos CCCPR/C/SR.108, SR.109 y SR.112, así como los Documentos Oficiales del trigésimotercer período de sesiones de la Asamblea General, Suplemento n° 40 (A/33/40), párrs. 409 a 450. Para el segundo informe periódico presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, véase el documento CCPR/C/28/Add. 3; para el examen del informe por el Comité, véanse los documentos CCPR/C/SR.564-567, SR570, así como los Documentos Oficiales del cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea General, Suplemento n° 40 (A/40/40), párrafos 251 a 319. Para el tercer informe periódico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, véase el documento CCPR/C/52/Add. 2; para el examen del informe por el Comité, véanse los documentos CCPR/C/SR.928-931, así como los Documentos Oficiales del Cuadragésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, Suplemento n° 40 (A/45/40), párrs. 72 a 119.

La información presentada por la Federación de Rusia de acuerdo con las directrices referentes a la parte inicial de los informes de los Estados partes está contenida en el documento básico (HRI/CORE/1/Add. 52).

INDICE

INFORMACION RELATIVA A DETERMINADOS ARTICULOS DEL PACTO

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
Artículo 1	1 - 14	3
Artículo 2	15 - 40	6
Artículo 3	41 - 50	11
Artículo 4	51 - 58	12
Artículo 5	59 - 62	14
Artículo 6	63 - 94	15
Artículo 7	95 - 108	21
Artículo 8	109 - 116	24
Artículo 9	117 - 143	26
Artículo 10	144 - 168	31
Artículo 11	169	36
Artículo 12	170 - 185	36
Artículo 13	186 - 187	40
Artículo 14	188 - 199	40
Artículo 15	200 - 203	42
Artículo 16	204	43
Artículo 17	205 - 212	43
Artículo 18	213 - 222	45
Artículo 19	223 - 235	47
Artículo 20	236 - 242	50
Artículo 21	243 - 246	51
Artículo 22	247 - 252	52
Artículo 23	253 - 260	53
Artículo 24	261 - 274	54
Artículo 25	275 - 281	56
Artículo 26	282	58
Artículo 27	283 - 301	58

INFORMACION RELATIVA A DETERMINADOS ARTICULOS DEL PACTO

Artículo 1

1. El derecho de los pueblos a la libre determinación está reflejado en la legislación de Rusia e incorporado repetidamente en su política interior y exterior. La adopción del Decreto Presidencial n° 1400, de fecha 21 de septiembre de 1993, "Reforma Constitucional por Etapas de la Federación de Rusia" fue un factor decisivo para la realización del derecho del pueblo de Rusia a decidir su propio destino en la etapa actual. La Constitución de Rusia actualmente en vigor, se basa en el reconocimiento de "los principios universalmente reconocidos de la igualdad y libre determinación de los pueblos" (Preámbulo), adoptado de conformidad con aquel decreto y la expresión de la voluntad del pueblo el 12 de diciembre de 1993. El régimen del nuevo Estado ruso proclamó la consolidación de la integridad de Rusia basada en principios auténticamente federales, de acuerdo con la libertad e igualdad de los súbditos de la Federación, sus derechos y obligaciones, y el equilibrio de sus intereses, prestando la debida consideración a sus diferencias nacionales y características territoriales. El establecimiento de la Federación de Rusia como un Estado nuevo e independiente formado como consecuencia del hundimiento de la antigua URSS y la evolución de la estructura federal de Rusia, significaron la realización del derecho a la libre determinación que poseían las muchas nacionalidades que constituían el pueblo ruso, y permitió detener la tendencia tanto hacia un centralismo rígido que restringiría los derechos de los pueblos como hacia la "concesión de soberanía" a los miembros de la Federación, que socavaría las mismas bases de su viabilidad y supervivencia en las actuales condiciones. La forma en que el derecho a la libre determinación se entiende en Rusia pasa por diversas formas de autonomía nacional, territorial y cultural.

2. La libertad de los pueblos a determinar su propia condición política y asegurar su desarrollo económico social y cultural se refleja en especial en el artículo 3 de la Constitución:

- "1. El titular de la soberanía y de la única fuente de poder en Rusia es su pueblo multinacional.
- "2. El pueblo ejercerá su poder directamente y también a través de las autoridades estatales y locales.
- "3. El referéndum y las elecciones libres serán la más alta expresión directa de la autoridad del pueblo.
- "4. Nadie puede apoderarse indebidamente del poder en la Federación de Rusia. El apoderamiento del poder o la usurpación de la autoridad serán castigados en virtud de la ley Federal."

3. La posibilidad de que los numerosos pueblos que integran la población del país establezcan libremente su condición política dentro del marco de la Federación, está garantizada en el artículo 65 de la Constitución, que prevé "La admisión en la Federación de Rusia o el establecimiento dentro de ella de un nuevo miembro en la forma estipulada por la ley constitucional Federal".

4. La combinación de los principios de la libre determinación y el federalismo se definen en los párrafos 3 y 4 del artículo 5 de la Constitución:

"3. La estructura federal de la Federación de Rusia se basará en su integridad como Estado, en la unidad del sistema de la autoridad estatal, en la delimitación de jurisdicciones y poderes entre los órganos estatales y la Federación Rusa y la de los miembros de la Federación de Rusia, así como en la igualdad y la libre determinación de los pueblos de la Federación de Rusia.

"4. Todos los miembros de la Federación de Rusia serán iguales en sus relaciones con las autoridades federales."

5. El derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales (párrafo 2 del artículo 1 del Pacto) se refleja en el artículo 9 de la Constitución):

"1. La tierra y demás recursos naturales se utilizarán y conservarán en la Federación de Rusia como base de la vida y actividad de los pueblos que habitan los territorios respectivos.

"2. La tierra y demás recursos naturales podrán ser de propiedad privada, estatal, municipal y de otro tipo."

6. La garantía para el derecho inalienable de los pueblos a los medios de subsistencia que les pertenecen se dispone en el párrafo 3 del artículo 67, que estipula que "Las fronteras entre los miembros de la Federación de Rusia no podrán modificarse sin consentimiento mutuo".

7. Este derecho viene acompañado de la garantía de la unidad de la zona económica del país, según indica el artículo 8 de la Constitución. Como se indicó en el mensaje del Presidente del 24 de febrero de 1994 a la Asamblea Federal "ningún grupo étnico puede alegar un derecho exclusivo de control sobre el territorio, las instituciones de autoridad y los recursos", de lo que se desprende que las decisiones deben alcanzarse por acuerdo mutuo y deben tener en cuenta los intereses de los distintos grupos nacionales.

8. Con respecto a la conservación del medio ambiente y el estilo de vida, el desarrollo de las ramas de la economía y ocupaciones tradicionales en las regiones de colonización y la actividad económica de los pueblos indígenas, el Parlamento ruso está terminando actualmente su examen de las disposiciones de los Principios de la Legislación de la Federación de Rusia sobre la Condición Jurídica de los Pueblos Minoritarios. Estos Principios, que fueron aprobados en segunda lectura en octubre de 1993, están destinados a confirmar el carácter inalienable de la propiedad de estos pueblos, que no puede enajenarse sin su acuerdo con fines industriales o de otra índole que no guarden relación con las ramas tradicionales de la economía y las ocupaciones tradicionales.

9. El Decreto Presidencial nº 850 de 4 de junio de 1993 sobre "Medidas Urgentes Referentes a la Organización del Estado en la Federación de Rusia" fue adoptado para facilitar el desarrollo práctico del Estado basado en la democracia y el federalismo. La libre elección del federalismo y la estructura federal del régimen estatal de Rusia encuentra también su expresión en la Constitución en el contexto del reconocimiento de las Administraciones locales y las garantías de que gozan (artículo 12), la inclusión del asunto del establecimiento de principios comunes para la organización de las administraciones locales dentro de la autoridad conjunta de la Federación de

Rusia y sus miembros (artículo 72), y la declaración de los derechos y poderes de las administraciones locales (artículos 130-133).

10. Además de la Ley sobre las "Administraciones locales" se han adoptado las Leyes siguientes que se encuentran en vigor: Decreto del Consejo Supremo de la Federación de Rusia de 27 de diciembre de 1991 "División de la Propiedad Estatal en la Federación de Rusia en Propiedad Federal, Propiedad Estatal de las Repúblicas Constituyentes de la Federación de Rusia, los territorios (krais), las provincias (oblasts), las provincias autónomas, las zonas (okrugs) autónomas, las ciudades de Moscú y San Petersburgo y la propiedad municipal" y los Decretos del Presidente de la Federación de Rusia n° 1760 de 26 de octubre de 1993, "Reforma de las Administraciones Locales en la Federación de Rusia", n° 1617 de 9 de octubre de 1993, "Reforma de los Organos Representativos y de las Instituciones de las Administraciones Locales en la Federación de Rusia" y n° 2665 de 26 de diciembre de 1993 "Garantías de las Administraciones Locales en la Federación de Rusia". De conformidad con el decreto mencionado en último lugar, el jefe de la administración local preside las reuniones del órgano representativo elegido para la administración local y es el jefe de la administración correspondiente (cláusula 4); tanto éste como los demás funcionarios de la administración local pueden ser miembros del órgano representativo correspondiente de la administración local (cláusula 5). Se ha propuesto en los Principios de la Legislación de la Federación de Rusia sobre la Condición Jurídica de los Pueblos Minoritarios que confirmen las garantías especiales para la administración local de los pueblos de Rusia minoritarios y su participación en la actividad de los órganos estatales. También está propuesta la adopción dentro de poco de nuevas leyes sobre las administraciones locales y su régimen fiscal, que deberían facilitar las bases económicas de aquéllas. Las audiencias parlamentarias sobre la reforma de las administraciones locales en la Duma del Estado (14-15 de marzo de 1994) fueron seguidas de la adopción de una recomendación para el desarrollo de la práctica de la protección legal de los derechos de las administraciones locales, para que los jefes de la administración de ciudades y asentamientos sean elegidos en lugar de nombrados, y que cuando sea posible se elija también a los jefes de los miembros de la Federación.

11. En el Decreto n° 734-1GD la Duma del Estado de la Asamblea Federal "Garantía de los Derechos Constitucionales de la Población para las Administraciones Locales en los Instrumentos Estatutarios de los Miembros de la Federación de Rusia", de fecha 10 de junio de 1994, figuran varias disposiciones concretas en este campo.

12. La Ley "La Rehabilitación de los Pueblos Reprimidos" de 26 de abril de 1991 constituyó un acto histórico de justicia sobre la ilegalidad de los pueblos reprimidos que se vieron obligados a reasentamiento forzoso y otros actos ilegales durante el período soviético. La Ley reconoce que tienen el derecho a la restauración de su integridad territorial, al restablecimiento de sus instituciones estatales nacionales o la creación de otras nuevas, de conformidad con su libertad de expresión, también la indemnización por los daños causados por el Estado. Pese al carácter indiscutiblemente positivo de esta Ley, no vino acompañada por el mecanismo para su aplicación, por lo que no se dispone de las medidas para la restauración territorial.

13. Sin embargo, se adoptaron otras disposiciones para la aplicación de esta Ley. Así, por ejemplo, el Decreto n° 4721-1 del Consejo Supremo de la

Federación de Rusia de 1 de abril de 1993 "Rehabilitación de los Coreanos Rusos" establece su derecho al libre desarrollo nacional, igualdad de oportunidades con otros pueblos para ejercer sus derechos y libertades políticas garantizadas por la legislación en vigor, el establecimiento de su derecho al regreso voluntario con carácter individual a los lugares en que habían vivido anteriormente en la Federación de Rusia.

14. En su política exterior la Federación de Rusia aboga constantemente por el derecho a la libre determinación de conformidad con el párrafo 3 del artículo 1 del Pacto. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, la Federación de Rusia apoyó la inclusión en la Declaración y Programa de Acción de Viena del párrafo 2 de la Parte I y otras disposiciones referentes a la confirmación del principio de la libre determinación.

Artículo 2

15. En relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, la Constitución enumera todas las formas inadmisibles de discriminación, incluida la discriminación por motivos de sexo, raza, nacionalidad, idioma, origen, posición económica u oficial, lugar de residencia, actitud ante la religión, creencias, pertenencia a asociaciones abiertas al público y otras circunstancias.

16. En relación con el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto y en virtud del artículo 2 de la Constitución, el Estado está obligado a garantizar los derechos y libertades humanas, mientras el artículo 46(3) reconoce la disposición del Pacto referente a los medios de protección jurídica internacional: "Toda persona tendrá derecho, de conformidad con las obligaciones contractuales internacionales de la Federación de Rusia, a recurrir a los órganos interestatales que se ocupan de la protección de los derechos y libertades humanas cuando se hayan agotado todos los recursos de protección jurídica interiores". Además, el párrafo 2 del artículo 45 reconoce el derecho del individuo a defender sus derechos y libertades por medios jurídicos: "Toda persona tendrá derecho a defender sus derechos y libertades de todas las maneras que no estén prohibidas por la ley".

17. El contenido del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto se refleja en diversas disposiciones de la Constitución. Así, el párrafo 1 del artículo 45 establece el principio general de la protección de los derechos y libertades individuales al estipular: "La protección estatal a los derechos y libertades civiles y humanas estará garantizada por la Federación de Rusia". El párrafo 1 del artículo 46 garantiza los derechos de toda persona a la protección de sus derechos y libertades. El párrafo 1 del artículo 48 garantiza el derecho a recibir asistencia jurídica. En casos en que esta prestación está prevista por la ley, la asistencia jurídica se facilita gratuitamente. Esta condición viene reflejada en el Decreto gubernamental de 7 de octubre de 1993 "Pago con cargo a los fondos públicos de los servicios de los abogados". De conformidad con el artículo 47 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dicho Decreto define la obligación del Ministerio de Hacienda de disponer recursos en el presupuesto estatal para prestación de asistencia jurídica gratuita.

18. Con arreglo al artículo 52 de la Constitución: "Los derechos de las víctimas de delitos o abusos de autoridad están protegidos por la ley. El Estado asegurará que las víctimas tengan acceso a la justicia e indemnización por los daños causados". Sin embargo, el testimonio de las organizaciones de

defensa jurídica indica que la indemnización por daños realmente causados es un asunto que exige el desarrollo de procedimientos adicionales.

19. El Decreto gubernamental n° 1319 de 23 de diciembre de 1993, dispone medidas para la creación de un régimen general estatal para el censo de la población y para la prueba documental oficial de la identidad de los ciudadanos.

20. El derecho a la protección judicial de los derechos y libertades está garantizado en la Constitución (artículo 46): "Todo individuo gozará de la protección jurídica de sus derechos y libertades".

21. Las decisiones y medidas (u omisiones) de los organismos oficiales, autoridades de la administración local, sociedades abiertas al público y funcionarios podrán ser recurridas por la vía judicial. El procedimiento a seguir se indica en la Ley de 27 de abril de 1993 "Recursos Jurídicos Contra las Acciones y Decisiones que Violan los Derechos y Libertades Civiles".

22. El artículo 2 del Código de Trabajo de la Federación de Rusia (LCRF) en su proyecto de 25 de septiembre de 1992 garantiza la protección judicial de los derechos laborales.

23. El artículo 210 del LCRF amplía considerablemente la protección judicial de los derechos laborales de todos los trabajadores cualquier que sea su campo de actividades y puesto ocupado.

24. Los tribunales entenderán de los conflictos laborales en las acciones planteadas por los trabajadores y la administración u organizaciones sindicales defenderán los derechos de sus miembros. Cuando los trabajadores recurran a los tribunales en demandas dimanantes de las relaciones reguladas por la ley laboral estarán exentos del pago de las costas judiciales estatales.

25. El LCRF aumenta el nivel de garantía de los derechos de las mujeres en el trabajo y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y prevé también distintas prestaciones para los trabajadores con cargas familiares, incluidos los beneficios por los hijos. El artículo 162 del LCRF amplía la definición de la mujer que no puede emplearse en trabajos nocturnos, hacer horas extraordinarias o trabajar en días de descanso, que no puede ser adscrita a empleos fuera de su lugar de residencia. El nuevo proyecto del artículo 163 estipula que las mujeres que tienen hijos comprendidos entre los 3 y 14 años de edad (16 años en caso de los hijos inválidos) tampoco podrán hacer horas extraordinarias ni ser destacadas a trabajos determinados sin su acuerdo. El párrafo 1 del artículo 163-1 de la LCRF garantiza el derecho de los padres (guardianes, padres adoptivos que eduquen a un niño inválido a disfrutar de un día adicional de vacaciones pagadas al mes.

26. Con arreglo a la Ley de la Federación de Rusia de 4 de abril de 1992 "Medidas Adicionales para la Protección de Madres e Hijos" la duración de la licencia por maternidad se fija a un período de 70 días naturales antes y 70 días después del parto. En el caso de que haya complicaciones en el parto, la licencia por maternidad siguiente al parto se amplía a 86 días, y cuando nacen dos o más hijos se prórroga a 110 días. La licencia por maternidad antes y después del parto se calcula *in toto* y se ofrece a la mujer plenamente, irrespectivamente del número de días de vacaciones que haya tenido antes del nacimiento. El artículo 165 del LCRF contiene disposiciones parecidas.

27. El nuevo proyecto de artículo 170 del LCRF prevé garantías adicionales para las mujeres embarazadas y para las mujeres con hijos, referentes a su contratación y despido del trabajo así como sobre el mecanismo jurídico para subsanar sus derechos laborales lesionados. El artículo 172-1 estipula que las garantías y beneficios concedidos a las mujeres con relación al embarazo, (restricciones sobre el trabajo nocturno y las horas extraordinarias, el trabajo en días de descanso, la adscripción a puestos determinados, la concesión de vacaciones adicionales, la creación de condiciones de trabajo preferentes y demás ventajas estipuladas por la legislación vigente) se harán extensivas a los padres que tengan que educar a sus hijos sin la ayuda de una madre y a los guardianes (padres adoptivos).

28. La Constitución contiene disposiciones por las que las personas que actúan con carácter oficial no quedan exentas por ello de responsabilidad. Ello se estipula en el artículo 53 de la Constitución, que reza "Toda persona tendrá derecho a ser indemnizada por el Estado por los daños y perjuicios que le hayan causado los actos ilegales (o la omisión) de las autoridades o sus funcionarios". El artículo 58-1 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que regula la responsabilidad de los órganos de investigación y juicio preliminar y los tribunales adopten las medidas previstas por la ley para indemnizar a un ciudadano por los daños causados a resultas de un procesamiento ilegal, ha sido suplementado por la condición de que dichos funcionarios deben explicar al ciudadano el procedimiento que debe seguir para que se le restituyan sus derechos.

29. Se ha reforzado el estatuto de las Fuerzas Armadas Rusas y la responsabilidad y obligaciones de las autoridades y la administración con respecto al ejército ruso han sido definidas con la adopción de las Leyes "Sobre la Defensa", "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas", "Alistamiento y Servicio Militar", "Previsión de Pensiones a las Personas que han cumplido el Servicio Militar en las Unidades del Ministerio del Interior y Sus Familias" y otros instrumentos estatutarios.

30. La Ley "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas" ocupa un lugar especial entre las Leyes mencionadas anteriormente. El estatuto de los miembros de las fuerzas armadas no tenía anteriormente una categoría jurídica aparte. La Ley "El Servicio Militar Universal" declaraba que los miembros de las fuerzas armadas gozaban de todos los derechos y libertades civiles, es decir, estaban considerados como los civiles. Los derechos y libertades enumerados en la Constitución se aplican plenamente a los miembros de las fuerzas armadas, pero el contenido de algunas disposiciones difiere ligeramente de las disposiciones generales civiles debido a sus limitaciones.

31. La Ley "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas" (artículo 5) proclama en especial que los miembros de las fuerzas armadas están bajo la protección del Estado. Con arreglo a dicha disposición, el insulto a los miembros de las fuerzas armadas, la violencia o intimidación contra ellos, el ataque contra su vida, salud, honor, dignidad, viviendas y bienes, y demás actos que infrinjan o restrinjan sus derechos con respecto al desempeño de sus obligaciones del servicio militar, se reconocen como circunstancias agravantes al determinar la responsabilidad y fijar la pena.

32. Los miembros de las fuerzas armadas no pueden simultanear el servicio militar con el trabajo en empresas, instituciones y organizaciones, y tienen

prohibido ayudar a individuos o sociedades en su calidad de miembros de las fuerzas armadas a llevar a cabo su actividad empresarial. El Estado indemniza por éstas y algunas otras restricciones de los derechos y libertades de los miembros de las fuerzas armadas (véanse también los textos referentes a los artículos 12, 18, 19, 21 y 25 del Pacto) concediendo derechos complementarios y concesiones, como unas mayores medidas de protección social (franquicias fiscales, precios reducidos para espectáculos, el derecho a la vivienda, la protección de la vida y la salud, cuidados médicos, una mayor pensión, etc.). El Decreto nº 295 del Consejo de Ministros y el Gobierno de la Federación de Rusia, de fecha 5 de abril de 1993, establece el procedimiento para el seguro estatal obligatorio de los miembros de las fuerzas armadas, los reclutas, y los oficiales y personal de otro rango de las unidades del Ministerio del Interior.

33. Existe también un régimen especial para los ciudadanos rusos u otras personas que se han visto obligadas o intentan abandonar su lugar de residencia permanente en el territorio de otro Estado o en el territorio ruso, a resultas de actos de violencia cometidos contra ellos o miembros de sus familias o la persecución de cualquier forma o cuando exista un riesgo real de ser discriminados y perseguidos con campañas hostiles, disturbios y otras circunstancias en menoscabo de sus derechos humanos. Dicho régimen está establecido en la Ley de 19 de febrero de 1993 sobre los "Migrantes Forzados", que estipula en detalle el procedimiento para adquirir el estatuto de "migrante forzado", sus derechos y obligaciones y el procedimiento para conceder indemnizaciones y prestar ayuda a dichas personas. El Servicio Federal Ruso para las Migraciones, que funciona de conformidad con el estatuto de 1 de marzo de 1993 dentro del cual se creó, está encargado de la coordinación de los asuntos referentes al cumplimiento de la Ley.

34. La Constitución garantiza los derechos de los extranjeros y apátridas en Rusia, basándose en el reconocimiento, respeto y protección por el Estado de los derechos humanos y civiles (artículos 2 y 17) y la igualdad de los pueblos bajo la jurisdicción de la Federación de Rusia ante la ley y los tribunales (artículo 19). Este principio fundamental está garantizado en la disposición siguiente del párrafo 3 del artículo 62: "Los ciudadanos extranjeros y personas apátridas en la Federación de Rusia disfrutarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los ciudadanos de la Federación de Rusia, excepto en los casos especificados en la ley Federal o por un tratado internacional de la Federación de Rusia.

35. La exclusión de dichas personas del régimen nacional atañe únicamente a los derechos que pertenecen exclusivamente a los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a participar en la administración de los asuntos del Estado, y en las elecciones y referendos, administrar justicia e ingresar en la administración del Estado (artículo 32), apelar a las autoridades estatales y a las autoridades de la administración local (artículo 33), a la defensa y protección en el extranjero (artículo 36), y también en relación con la responsabilidad para cumplir el servicio militar (artículo 59) y garantiza contra la expulsión y la extradición. (artículo 61). Con respecto a los derechos de los extranjeros a reunirse, celebrar manifestaciones, dicho derecho está implícito en el contexto del párrafo 4 del artículo 15 de la Constitución, según cuyos términos: "Los principios y disposiciones de derecho internacional universalmente reconocidos y los tratados internacionales en los que la Federación de Rusia sea parte constituyen un elemento de su ordenamiento jurídico", y también el párrafo 1 del artículo 17, según el cual: "En la Federación de Rusia los derechos y

libertades humanas y civiles estarán reconocidos y garantizados en virtud de los principios y reglas del derecho internacional universalmente reconocidos y de conformidad con su Constitución". El derecho de los extranjeros a la libertad de reunión y asociación pacíficas debe pues reconocerse, especialmente atendiendo al artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

36. La Ley de la URSS de 24 de junio de 1981 "Condición Jurídica de los Ciudadanos Extranjeros en la URSS" se encuentra en vigor en la actualidad en la Federación de Rusia. Respecto al hecho de que sus disposiciones no corresponden a la realidad de la situación dimanante del hundimiento de la URSS, hay en la actualidad un proyecto de ley sobre la condición jurídica de los ciudadanos extranjeros en la Federación de Rusia que se encuentra en una etapa avanzada de preparación. La legislación referente a los extranjeros debe actualizarse debido a la necesidad de suprimir las restricciones ilegales de los derechos de estos individuos, incluidas las restricciones dimanantes de la adopción de decisiones administrativas sobre la aplicación a ellos de unas tasas mayores para determinados tipos de servicios.

37. La contratación de ciudadanos extranjeros para trabajar en Rusia se rige por los procedimientos especiales establecidos por el Decreto Presidencial de 16 de diciembre de 1993 "Contratación y Empleo de Mano de Obra Extranjera en la Federación de Rusia" que dispone que los extranjeros que no hayan entrado en Rusia de la manera estipulada por el Decreto podrán ser expulsados del país. Dicho Decreto confirma el Reglamento para la Contratación y Empleo de Mano de Obra Extranjera en Rusia (véase también el texto referente al artículo 12 del Pacto).

38. La Constitución (artículo 63) tiene una garantía especial para las personas perseguidas por sus convicciones políticas:

- "1. La Federación de Rusia concederá asilo político a los ciudadanos extranjeros y apátridas de conformidad con las reglas universalmente reconocidas de derecho internacional.
- "2. La extradición a otros países de las personas perseguidas por sus convicciones políticas o acciones (u omisiones) no reconocidas como delito en la Federación de Rusia no estará permitida. La extradición de personas acusadas de haber cometido un delito y la entrega de personas condenadas para cumplir una sentencia en otros Estados se realizará de acuerdo con la ley Federal o con un tratado internacional en el que la Federación de Rusia sea parte."

39. Con respecto a las obligaciones asumidas por Rusia al acceder a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el Protocolo de 1976, ha entrado en vigor una Ley sobre "Refugiados" con fecha 19 de febrero de 1993, que establece en detalle los procedimientos para el reconocimiento del estatuto de refugiado y garantiza sus derechos y obligaciones, así como los asuntos referentes a la prestación de la asistencia apropiada.

40. Rusia atribuye una gran importancia a la provisión jurídica de los derechos humanos en el país (en 1994 se redactó un programa Federal de las actividades referentes a la protección de los derechos Humanos) y en los países vecinos más próximos. Está en preparación un programa para la protección de los conciudadanos en el extranjero. El Acuerdo sobre la Creación de la Comunidad de

Estados Independientes de 8 de diciembre de 1991 y el Estatuto de la Comisión de Derechos Humanos de la CEI contienen garantías para la protección de los derechos humanos. Está en preparación un convenio sobre derechos humanos en la CEI (véase también el texto referente al artículo 27 del Pacto).

Artículo 3

41. Las garantías constitucionales sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres dimantes del artículo 3 del Pacto están incorporadas en el párrafo 3 del artículo 19 de la Constitución: "Los hombres y las mujeres gozarán de los mismos derechos y libertades y de igualdad de oportunidades para ejercerlos".

42. La legislación de Rusia no contiene ninguna disposición que imponga restricciones jurídicas a los derechos por motivos de sexo. La información sobre la legislación rusa, como se aplica la ley en la práctica así como la situación en el país referente a las medidas para asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres figuran en el informe de Rusia a la Cuarta Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, y también en el cuarto informe periódico sobre la aplicación en la Federación de Rusia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se presentará a la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en septiembre de 1994.

43. Las organizaciones de mujeres que existían en Rusia hasta 1993 no podían nombrar independientemente candidatas para los órganos representativos porque carecían de la calidad de organización política. En 1993 el movimiento político Mujeres de Rusia, creado por la Unión de Mujeres de Rusia, la Asociación de Mujeres de Negocios y la Unión de Mujeres de la Marina, tuvieron la posibilidad de nombrar a sus candidatas a la Asamblea Federal.

44. El servicio de las mujeres en las fuerzas armadas está regulado por la legislación sobre el alistamiento y el servicio militar. Así pues, la Ley "Alistamiento y Servicio Militar" del 11 de febrero de 1993 dispone la inscripción de las mujeres en las oficinas de las fuerzas armadas después de haber adquirido su competencia militar (artículo 8) para recibir instrucción militar y formarse como oficiales de reserva (artículo 17), así como los derechos de las mujeres de 20 a 40 años para alistarse al servicio militar (artículo 30). La Ley "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas" de 22 de enero de 1993 dispone que las mujeres alistadas en el ejército gozarán de los mismos derechos y privilegios previstos por la legislación sobre la protección de la familia, madres e hijos (artículo 16).

45. En 1990 el 3,5 por ciento de los miembros de las fuerzas armadas eran mujeres; en 1993 esta cifra se elevó al 9 por ciento.

46. El régimen actual para la protección jurídica de la familia, mujeres y niños en Rusia no es todavía lo bastante eficaz. La situación actual de la familia, mujeres y niños se ve perjudicada por el desarrollo retrasado del sistema jurídico que regula las relaciones familiares, sistema que evoluciona continuamente con las condiciones cambiantes y cuya finalidad es asegurar la igualdad de los derechos y obligaciones de los cónyuges y la educación y protección de los hijos; este desarrollo retrasado tiene como consecuencia la insuficiencia del mecanismo jurídico necesario para asegurar la efectividad de

los derechos y obligaciones mutuas estipuladas por la ley, y la responsabilidad por el incumplimiento de la legislación y de las garantías por parte del Estado.

47. La transición a unas nuevas relaciones sociales y la formación de una economía de mercado exigen el reexamen de todo el sistema legislativo desde el punto de vista de la política de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los campos de la vida, incluida la familia, el trabajo y las relaciones civiles. Está en estudio la posibilidad de redactar legislación sobre la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral.

48. La legislación laboral garantiza expresamente la igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los campos de las relaciones laborales, estipula un conjunto especial de reglas con respecto a la función reproductora de la mujer. La "Ley sobre el Empleo en la Federación de Rusia" de 19 de abril de 1991 exige que la política del Estado en materia de empleo se dirija a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos que viven en Rusia con independencia de su sexo (artículo 5). Sin embargo, el mecanismo para dar efecto a este instrumento legal no se ha desarrollado todavía, y exigen escasas pruebas de su aplicación, especialmente con respecto a la discriminación contra la mujer. En especial, es casi imposible demostrar ante los tribunales que la negativa a contratar a una mujer embarazada y a las mujeres con hijos de corta edad sea discriminatoria.

49. La objetividad exige alguna mención del problema de la protección de los derechos del padre, que pueden considerarse como restringidos en comparación con los derechos de la madre, en cuanto al acceso a los hijos después del divorcio para la educación de los hijos. La igualdad de derechos entre los padres a este respecto es interpretada por los tribunales en el sentido de dar prioridad a la madre, dejándose la carga de la prueba en contrario al padre. A este respecto, se está estudiando la posibilidad de redactar una ley que proteja a las madres, padres e hijos. La asociación rusa de derechos humanos "Padres e Hijos" aboga por la igualdad en este campo.

50. El sistema judicial se utiliza en la práctica para asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En marzo de 1994, por ejemplo, el Tribunal de Apelación del Presidente de la Federación de Rusia examinó la apelación presentada por la Unión de Mujeres de Rusia y la Unión de Abogados con respecto a la infracción de las disposiciones de la Constitución de la Federación de Rusia sobre la igualdad de las mujeres en varios de los órganos de la prensa escrita de gran circulación, a saber, anuncios publicados para la contratación de personal con carácter competitivo, en los que se indicaba que la convocatoria estaba abierta sólo a los hombres. El Tribunal Presidencial de Apelación dictaminó que dichos anuncios constituían un grave atentado contra la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y lo notificó a los jefes de redacción de aquellas publicaciones.

Artículo 4

51. Los asuntos referentes a la declaración del estado de excepción y a la imposición de algunas restricciones sobre los derechos y libertades en el territorio del país se tratan en la Constitución (artículo 56) de conformidad con el artículo 4 del Pacto. La Ley "Estados de Excepción" de 17 de mayo de 1991 establece las condiciones, motivos y procedimiento para la declaración del estado de excepción y las formas del control estatal durante su duración, y

dispone las medidas que pueden adoptarse de acuerdo con las condiciones imperantes, y también garantiza los derechos y obligaciones de los ciudadanos y funcionarios.

52. La declaración del estado de excepción en Moscú en octubre de 1993 se debió al hecho de que se había producido una situación en la que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para el establecimiento de un Estado de derecho para llevar a cabo las reformas económicas habían provocado la oposición del poderoso Congreso de Diputados del Pueblo. El Presidente tomó las medidas de emergencia a las que se vio obligado para disolver el Soviet Supremo y el Congreso, para vencer los obstáculos jurídicos y dar al pueblo de Rusia el derecho a expresarse sobre el asunto a través de unas elecciones. Las medidas del Presidente contravenían el artículo 121-6 de la Constitución (los poderes del Presidente no podrán utilizarse para suspender los poderes de ninguno de los órganos estatales legalmente elegidos). Conviene tener en cuenta, sin embargo, el hecho de que este mismo artículo se había insertado en la Constitución ya en vigor como contramedida de un asunto que había sido debatido en Rusia, a saber, del derecho del Presidente a convocar elecciones parlamentarias anticipadas. De no haber actuado el Presidente como lo hizo, se habría vulnerado el principio básico de la Constitución (el principio del poder del pueblo y la separación de poderes), se habría terminado la reforma económica y se habría puesto en peligro la unidad e integridad de la Federación de Rusia.

53. La orientación democrática de las medidas adoptadas por el Presidente y el Gobierno se desprende claramente del hecho de que el Decreto de 21 de septiembre de 1993 "Reforma Constitucional por Etapas de la Federación de Rusia" fijaba las fechas precisas para las elecciones a la Duma del Estado, garantizaba la celebración de elecciones libres y mantenía plenamente los derechos humanos y las libertades básicas, incluido el derecho a participar como candidato a las elecciones y la libertad de reunión y actividad política. Tanto el Presidente como el Gobierno destacaron repetidamente que se encontraría una salida a la crisis sin recurrir a la fuerza, y con el debido respeto a las normas generalmente reconocidas de lucha política con la oposición.

54. La posibilidad de controlar la crisis por medios políticos quedó agotada cuando Khasbulatov y Ruts koy incitaron el 3 de octubre a la toma del Kremlin por las armas, las oficinas del Ayuntamiento de Moscú y el estudio de televisión estatal de Ostankino. El llamamiento y las acciones encaminadas a usurpar el poder del Estado convirtió la resistencia política de la oposición en un levantamiento armado. Los partidarios del Soviet Supremo, con el apoyo de grupos armados organizados, causaron matanzas y disturbios callejeros, constituyendo una grave amenaza para la vida en Moscú el 3 de octubre de 1993. La seguridad de Rusia quedó en entredicho. Como garante de la seguridad del país y sus ciudadanos, el Presidente declaró el estado de excepción en la capital durante la noche del 3 de octubre de 1993 con arreglo a la Ley "Estados de Excepción" y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y adoptó medidas para su vigencia. Ante la negativa de la oposición de deponer las armas y las actividades constantes de los militantes, que amenazaban la vida y salud de la población, el Presidente se vio obligado a sofocar la revuelta.

55. Las medidas del Presidente estuvieron a la altura de la gravedad de la situación en todos los momentos del enfrentamiento. El principio de la proporcionalidad consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos quedó así respetado. Aun en la supresión armada de la revuelta se

hizo todo lo posible para minimizar la pérdida de vidas, y en todos los momentos de la operación para liberar la Casa Blanca se ofreció a los insurgentes la posibilidad de abandonar el edificio del parlamento sin ser molestados.

56. Respecto a las restricciones temporales sobre algunos derechos y libertades con respecto a la declaración del estado de excepción, aquéllas no difieren de las normas de derecho internacional universalmente reconocidas (artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) o de las disposiciones de la Ley rusa "Estados de Excepción" de 17 de marzo de 1991 (suspensión de las actividades de las organizaciones públicas hasta que se normalice la situación, restricciones sobre la libertad de prensa y otros medios de comunicación).

57. Durante el estado de excepción se produjeron abusos de los derechos civiles que son objeto de estudio. Por ejemplo, las infracciones de los derechos civiles ocurridas durante las actividades mencionadas en octubre de 1993 han sido objeto de una investigación por parte del fiscal y se han iniciado los trámites procesales en caso necesario contra los actos ilegales cometidos por miembros de las fuerzas armadas y la milicia. Esta investigación ha puesto de manifiesto que la inactividad de varios ministros y los defectos de algunas leyes deben ser objeto de enmienda. Así, se ha hecho presente la falta de normas que rijan el procedimiento para suspender la actividad de las asociaciones abiertas al público en la legislación de 1990 a este respecto vigente en Rusia.

58. La declaración del estado de excepción en 1992 en algunos territorios de Ossetia Norte y Ingushetia vino acompañada de la creación de un órgano gubernamental federal de carácter temporal para supervisar el estado de excepción de conformidad con los edictos presidenciales pertinentes y de acuerdo con las "Disposiciones sobre la Administración Provisional en estas Regiones" de 29 de marzo de 1993, que fueron aprobadas por el Presidente (véase también el texto referente a los artículos 1, 20 y 27 del Pacto).

Artículo 5

59. Los requisitos establecidos por este artículo se reflejan en los párrafos 1 y 2 del artículo 55 de la Constitución:

- "1. La enumeración de derechos y libertades fundamentales en la Constitución de la Federación de Rusia no debe interpretarse como denegación o menoscabo de los demás derechos y libertades del hombre y del ciudadano universalmente reconocidos.
- "2. En la Federación de Rusia no se promulgarán leyes para la abolición o menoscabo de los derechos y libertades humanas."

60. La interpretación inadecuada de toda disposición del Pacto queda excluida por la combinación de las disposiciones de la Constitución referentes, por un lado, al reconocimiento de los derechos y libertades de conformidad con los principios universalmente reconocidos y las normas del derecho internacional y de conformidad con la Constitución (artículo 17) y, por otro lado, el reconocimiento de estos derechos y libertades se ejerce directamente (artículo 18) en el contexto de la primacía de las normas de un acuerdo internacional (artículo 15).

61. En la práctica este artículo exige al Estado proceder a una clara evaluación de la compatibilidad de las actividades de los individuos o grupos en su territorio con las exigencias del Pacto y adoptar medidas decisivas para suspender su actividad en el caso de que se encaminaran a la destrucción de los derechos y libertades o a su restricción en un grado superior al reconocido en el Pacto.

62. A medida que progresa la transición de la sociedad rusa hacia una economía de mercado surge la limitación indirecta del ejercicio de los derechos humanos individuales en la creación de organizaciones comerciales, cuyo propósito es hacerse cargo de las funciones de los órganos estatales que están obligados a facilitar determinados documentos libres de gastos (certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, etc, asignación de terrenos, privatización, etc.), y prestar también servicios adicionales. El Ministerio Fiscal ha investigado algunas de estas organizaciones comerciales que exigen pagos ilegales a la población, lo que ha llevado a presentar una serie de protestas sobre los hechos establecidos, la revocación de algunas de las decisiones de las autoridades locales y la suspensión de las actividades de dichas organizaciones comerciales.

Artículo 6

63. El derecho a la vida está garantizado en la Constitución (artículo 20) y es objeto de la protección del Estado, al igual que todos los derechos y libertades humanas y civiles (artículo 45).

64. El Código de Trabajo ofrece un sistema de medidas encaminadas a la protección de la vida y salud de los trabajadores (capítulo 10, protección laboral). La dirección de las empresas, establecimientos y organizaciones tienen la responsabilidad de garantizar la salud y las condiciones de seguridad en el trabajo y la introducción de medidas de seguridad modernas (artículo 139).

65. Causar la muerte de una persona sin justificación es un acto que acarrea responsabilidad penal en virtud del Código Penal. El párrafo 3 del artículo 41 de la Constitución estipula que "La ocultación por los funcionarios de hechos y circunstancias que supongan una amenaza para la vida y la salud entrañará responsabilidad de conformidad con la ley federal". Los delitos contra la vida y la salud del individuo constituyen una categoría aparte que acarrea la responsabilidad penal en virtud del Código Penal (capítulo 3). Entre los nuevos elementos debemos distinguir una mayor responsabilidad por la realización, producción, almacenamiento, suministro y transporte de armas biológicas, por la infracción de los reglamentos de seguridad en la manipulación de agentes microbiológicos y otros agentes biológicos y toxinas cuando dichas acciones hayan redundado en la muerte de un ser humano o hayan puesto en peligro su salud (artículos 67-2 y 222-1 del Código Penal, introducido por la Ley de 29 de abril de 1993).

66. Garantías para la protección de la salud de los miembros de las fuerzas armadas figuran en la Ley "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas". Así pues, entre las obligaciones de los jefes figura el cuidado en preservar la vida y salud de los miembros de las fuerzas armadas (artículo 16), incluidas las exigencias de seguridad que deben observarse en la realización de sus obligaciones y ejercicios militares y en el uso de armas y equipos militares. Los intentos contra la vida de los miembros de las fuerzas armadas están

considerados como circunstancias agravantes al determinar la responsabilidad y la pena (artículo 5).

67. El contenido del párrafo 2 del artículo 6 se refleja en el párrafo 2 del artículo 20 de la Constitución de la Federación de Rusia, que especifica: "Hasta tanto no sea abolida, la pena de muerte podrá ser impuesta por la ley federal como pena excepcional para delitos especialmente graves contra la vida, y el acusado tendrá el derecho a ser juzgado en un tribunal con la participación de un jurado".

68. La lista de delitos para los cuales puede imponerse la pena de muerte se ha reducido apreciablemente. Una Ley de 5 de diciembre de 1991 rescindía la pena de muerte para la infracción agravada de las normas sobre las operaciones con divisas, el robo en gran escala, la aceptación de sobornos en circunstancias especialmente agravantes. He aquí una lista de los delitos graves para los cuales rige todavía la pena de muerte: asesinato premeditado con circunstancias agravantes (artículo 102 del Código Penal); traición a la patria; terrorismo; espionaje; secuestro, bandidismo; violación.

69. Una Ley de 17 de diciembre de 1992 prevé la sustitución de la pena de muerte por la cadena perpetua.

70. La pena de muerte no puede imponerse a mujeres, a las personas que no hayan alcanzado los 18 años de edad antes de cometerse el crimen, ni a los hombres de más de 65 años (Ley de 29 de abril de 1993).

71. La persona condenada a muerte tendrá el derecho de apelar contra la sentencia al tribunal de apelación o a un órgano supervisor y tendrá también el derecho de solicitar el perdón del Presidente de Rusia (artículo 89 de la Constitución).

72. De conformidad con las sentencias ejecutadas legalmente, la pena de muerte se utilizó en Rusia 223 veces en 1993, 159 veces en 1992 y 147 veces en 1991. La pena de muerte se impuso principalmente por el asesinato premeditado con circunstancias agravantes.

73. De acuerdo con la información facilitada por la ONG rusa, la Sociedad "Derecho a la Vida" Contra la Pena de Muerte y la Tortura, varios de los incidentes que se produjeron al sofocar la revuelta en Moscú el de los días 3 y 4 de octubre pueden calificarse de ejecuciones sin previo juicio.

74. Las autoridades rusas observan con preocupación que varias de las víctimas de catástrofes a resultas de las cuales perecen personas inocentes todos los años aumentan en el país (en 1993 perecieron 1.224 personas a resultas de situaciones excepcionales). El Ministerio de la Federación de Rusia para la Defensa Civil, Emergencias y Socorro, que preparó el informe "Situaciones de emergencia en 1993" redactó recomendaciones para hacer frente a las emergencias y al socorro en caso de desastre, que incluyen:

(a) Unos requisitos más rigurosos para las inspecciones estatales destinadas a una vigilancia efectiva de la situación cuando exista un peligro potencial, y de la situación sanitaria y epidemiológica en la Federación de Rusia;

(b) Financiación oportuna de medidas para prevenir emergencias y hacer frente a las que se hayan producido y para asegurar la seguridad y protección de la población según se prevé en los programas federales que se han aprobado;

(c) Creación de fondos de reserva territoriales de emergencia destinados a prestar financiación, alimentos, suministros médicos y equipo para la prevención de las catástrofes y socorro;

(d) Una mejor preparación para prestar personal y recursos en los casos de prevención de desastres y socorro;

(e) Asignación de recursos financieros del fondo de reserva del Gobierno de la Federación de Rusia para la creación de un fondo para responder rápidamente a la prevención de desastres y socorro.

75. Las armas nucleares situadas en el territorio de Ucrania y Kazajstán donde las autoridades demostraron no estar en situación después del hundimiento de la URSS de asegurar que sus cabezas de guerra se mantendrían en condiciones de seguridad, constituyen una fuente de riesgos crecientes para la vida humana. La falta de control y de infraestructura de mantenimiento en estos países en los umbrales de 1995 de las últimas etapas del proceso al final del plazo para garantizar su servicio de los cohetes fue uno de los factores que apresuró a la conclusión de los acuerdos de estos países con Rusia y los Estados Unidos, exigidos en el contexto del tratado START-1. Estos acuerdos, especialmente el referente al servicio de las armas nucleares ucranianas por parte de especialistas rusos, el acuerdo sobre las condiciones y orden de prioridades para la entrega de las cabezas de guerra nucleares a Rusia, con un calendario para finalizar la entrega, y el acuerdo entre Kazajstán y Rusia y los Estados Unidos sobre las condiciones para la destrucción de las armas nucleares, han contribuido a reducir la amenaza de un desastre.

76. El derecho de los ciudadanos rusos a la vida se encuentra gravemente amenazado debido al insatisfactorio nivel de seguridad de las instalaciones nucleares rusas. En ejecución de la Orden Presidencial n° 224-rp del 9 de abril de 1993, Gosatomadzor de Rusia ha examinado todos los emplazamientos en los que existen peligros nucleares y de radiación con miras a conseguir la seguridad nuclear y radioactiva y su protección física. El examen de más de 200 de dichos lugares ha indicado que su estado no es satisfactorio desde el punto de vista del peligro que pueden suponer para la vida humana, la necesidad de adoptar textos jurídicos complementarios, la solución al problema del tratamiento y evacuación sin riesgos de los materiales nucleares gastados de conformidad con las normas modernas. Los resultados de este examen se publicaron en el periódico "Nezavisimaya gazeta" número 30 (706) de 16 de febrero de 1994.

77. La legislación sanitaria de Rusia, basada en la Ley de 19 de abril de 1994 "El Bienestar Sanitario y Epidemiológico de la Población" dispone una amplia gama de garantías emitidas para prevenir toda amenaza a la vida y a los intereses de la sociedad dimanantes de las enfermedades, envenenamiento y epidemias, y para prevenir todo efecto nocivo para el organismo humano debido a factores ambientales, del consumo de alimentos, y de fuentes radioactivas letales. La Ley establece los procedimientos que debe seguir el Servicio Estatal Sanitario y Epidemiológico de Rusia. En vista de la amenaza que representa para la vida humana el SIDA (HIV) se está redactando en Rusia una ley

sobre la "prevención del SIDA" que ha sido sometida al examen técnico de la Organización Mundial de la Salud.

78. La defensa del derecho a la vida en el contexto de las relaciones entre productores y consumidores se rige por la leyes correspondientes. Así, de conformidad con la Ley nº 5304-1 de 1 de julio de 1993 "Enmiendas y Adiciones a la Legislación de la Federación de Rusia con respecto a la Regularización de la Responsabilidad por el Comercio Ilegal" se ha insertado en el Código Penal una nueva redacción del artículo 157. Dicho artículo declara delito la producción o venta de bienes o prestación de servicios que no reúnan las condiciones de seguridad para la protección de la vida y la salud de los consumidores y clientes y que puedan perjudicar la salud o constituir un riesgo potencial para ésta.

79. Los casos de robo de materiales nucleares son motivo de grave preocupación así como la excesiva radiación de los individuos en las instalaciones que constituyen un peligro nuclear o de radiación, de los que existen 14.500 en Rusia. Si bien el Gobierno ruso es consciente de los problemas dimanantes a este respecto, el sistema de inspección interministerial no se extiende todavía a todas estas instalaciones y en especial están excluidas las que caen bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. La falta de financiación hace imposible en la actualidad sufragar el costo de las medidas adoptadas por el Gobierno con respecto a la situación en las instalaciones nucleares: para uno de los dos Decretos de 1993 no se ha asignado todavía recurso alguno y para el otro tan sólo se ha facilitado el 15 por ciento de los fondos necesarios.

80. La protección del derecho a la vida contra los intentos criminales y otros intentos ilegales contra el individuo es una de las prioridades de la milicia, según estipula la Ley de la Milicia de 18 de abril de 1991 (artículo 1) que regula las atribuciones y responsabilidades de la milicia, incluidos los motivos y procedimiento para el uso de la fuerza, medios especiales y armas de fuego (artículos 12-15). Con miras a asegurar el cumplimiento de este cometido, las unidades del Ministerio del Interior se orientan también por las disposiciones de la Ley "Actividades Operacionales y de Búsqueda en la Federación de Rusia" de 13 de marzo de 1992, por la Ley "Enmiendas y Adiciones al Código de Trabajo Correctivo de la RSFSR" de 12 de junio de 1992, por los Reglamentos sobre el Servicio en las Unidades del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, por el Juramento de Fidelidad de los Miembros de las Unidades del Ministerio del Interior, ambas aprobadas por Decreto del Consejo Supremo de la Federación de Rusia con fecha 23 de diciembre de 1992, por las Reglas para el Uso de Medios Especiales para el Armamento de Unidades del Ministerio del Interior de la RSFSR (nº 455) aprobadas por el Decreto del Consejo de Ministros de la RSFSR con fecha 3 de septiembre de 1991, por el Reglamento de la Milicia para la Seguridad Pública (Milicia Local) en la Federación de Rusia, aprobado por el Edicto nº 209 del Presidente de Rusia con fecha 12 de febrero de 1993, y por el Reglamento de Régimen Interior de los Establecimientos de Trabajos Correctivos (Orden nº 421, de fecha 23 de noviembre de 1992, del Ministerio del Interior Ruso).

81. La admisibilidad de la pérdida de la vida como resultado del uso legítimo de armas por miembros de las unidades del Ministerio del Interior se desprende de la Ley "La Milicia" que se refiere a los casos de detención de un individuo que ofrezca resistencia armada o que haya cometido un grave delito y a casos de prevención de la fuga de dicho individuo (párrafo 1 del artículo 15). El juez instructor debe ser notificado dentro de las 24 horas mediante un informe

especial en el caso de que se hayan producido la muerte o lesiones. Esta Ley especifica que el uso de armas debe guardar relación con el riesgo de la violencia criminal.

82. La Ley "Instituciones y Organos que Administran las Penas de Privación de Libertad" de 21 de junio de 1993, en la que se refleja con toda claridad el criterio de la proporcionalidad, prevé el uso de la fuerza física, medios especiales y armas y establece los criterios para su uso, comprende los casos de los que se desprenda una amenaza directa para la vida y salud del personal, los miembros de las unidades del Ministerio del Interior, y también para las personas condenadas o prisioneras (véase también el texto referente al artículo 10 del Pacto). En virtud de dicha Ley el uso de armas de fuego está prohibido con respecto a las mujeres cuyo embarazo sea evidente, y las personas claramente incapacitadas y los menores, excepto en caso que ofrezcan una resistencia armada, o en caso de que realicen un ataque armado o colectivo que ponga en peligro la vida y la salud (artículo 31).

83. La privación ilegal de libertad, definida como un acto llevado a cabo de forma que ponga en peligro la vida o la salud de la víctima o acompañado de sufrimientos físicos de ésta, es objeto de un grave castigo según los términos del Código Penal (artículo 126). Se trata aquí de la creación de una auténtica amenaza para la vida o que cause una enfermedad. Este delito se trata como un acto de violencia (física o mental) contra la víctima. El Código Penal considera también otras categorías de delitos que ponen en peligro la vida humana (artículos 127, 128, etc.).

84. El programa federal para la intensificación de la lucha contra el crimen en 1994-1995 contiene medidas muy concretas susceptibles de aumentar el nivel de protección del público. Entre ellas figuran inspecciones a escala nacional de la legalidad de la posesión de armas de fuego por los ciudadanos, la formulación de un mecanismo eficaz para que los funcionarios públicos declaren sus ingresos; la creación de servicios de información especializados que deberían aumentar la eficacia de las búsquedas de las personas desaparecidas; la constitución de fondos para la rehabilitación de las víctimas de crimen y de las personas liberadas de los lugares de detención. La acuciante necesidad de proseguir este programa dimana de las aspiraciones de las fuerzas opuestas a la reforma de explotar el problema del crimen para rebajar los derechos y libertades democráticas.

85. En los casos de disturbios de masas la protección del derecho a la vida adquiere un especial significado para asegurar el orden público e impedir la desestabilización del país y la guerra civil. Los acontecimientos de Moscú los días 3 y 4 de 1993, en los que se produjo la pérdida de vidas humanas (147 personas resultaron muertas) pusieron de manifiesto que es posible abusar de la democracia constituyendo órganos armados ilegales, que ponen en peligro mortal aquel derecho para la mayoría de la población y dejando en entredicho las funciones de la defensa.

86. La Ley N° 2487-1 de 11 de marzo de 1992 "Servicios de detectives privados y de protección en la Federación de Rusia" regula la prestación de estos servicios a particulares y empresas por parte de agencias autorizadas por el Ministerio de Asuntos Interiores, incluso los autorizados a actuar de guardaespaldas. Tan sólo en Moscú se han creado 373 agencias de este tipo y 450 servicios de seguridad, habiéndose concedido para ello 9.000 licencias.

87. En el transcurso del establecimiento de los cimientos de una economía de mercado, Rusia se ha visto enfrentada a graves consecuencias sociales, manifestadas por la baja de los ingresos reales, el deterioro de la situación medioambiental, la elevada incidencia de enfermedades, la escasez de medicinas, y los pobres resultados de otros indicadores. Cerca del 35 por ciento de la población ha caído por debajo del nivel de pobreza, con unos ingresos inferiores al del salario mínimo. Ello ha creado una amenaza para la supervivencia de una gran parte de la población, a su derecho a la vida, que el Estado no está en situación de asegurar en toda su plenitud. La información básica a este respecto y un análisis de la misma se encuentra en el informe de la Federación de Rusia sobre la población, redactado por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo, 5-13 de septiembre de 1994), y se presentará también en el informe periódico de Rusia para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos en 1994 y en el informe de Rusia a la Cumbre sobre el Desarrollo Social de 1995.

88. La defensa del derecho humano a la vida ha pasado a revestir especial importancia con respecto a las disputas internacionales y étnicas dentro de la Federación Rusa que han afectado a varias regiones del país y territorios extranjeros vecinos. El conflicto armado surgido en Ossetia Norte e Ingushetia obligó a las autoridades rusas a declarar el estado de excepción en varias localidades y a renovarlo cada dos meses desde el 2 de noviembre de 1992. Se ha encargado a la administración provisional de esta región el ejercicio de las atribuciones necesarias en la forma indicada (véase también el texto referente al artículo 4 del Pacto).

89. Prosigue la labor correspondiente a los Decretos Presidencial y Gubernamental para conseguir el regreso voluntario de los refugiados de las repúblicas de la antigua URSS que se encuentran actualmente en Ossetia Norte, a los lugares donde habían vivido anteriormente. Nos referimos a los refugiados de Georgia (unos 29.000), Tadyikistán (unos 1.500), Armenia (más de 100) y Azerbaiyán (unos 100). El requisito previo para el lanzamiento de la operación de repatriación debe ser la supresión de los motivos que obligaron a los pueblos a abandonar sus países (cesación del conflicto, operaciones militares y encuentros armados, y la consecución de una resolución pacífica que tenga en cuenta los aspectos humanitarios, económicos y políticos, y el establecimiento de condiciones que permitan a los repatriados vivir una vida normal). De conformidad con las normas internacionales, la repatriación debe ser voluntaria y llevada a cabo debidamente y debe excluir la incertidumbre acerca del regreso.

90. Una elevada proporción de los refugiados de Ossetia Norte proceden de Georgia donde la situación no es propicia para su regreso. La situación de los refugiados Tadyik también pone de manifiesto el carácter político del proceso de repatriación.

91. El reforzamiento de la defensa del derecho a la vida en la época postsoviética en estrecha colaboración con los nuevos estados independientes con respecto a la situación que ha surgido, es un derecho sagrado del Estado ruso en su misión de pacificador y mediador. Cuando se utilizan las tropas rusas como fuerzas de paz es invariablemente con el acuerdo y a petición de las partes en la disputa y de conformidad con unos acuerdos que no difieren de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En la mayoría de estos casos no hay más remedio que utilizar las fuerzas de pacificación rusas para impedir el

derramamiento de sangre. La actuación de las tropas rusas contribuye a mantener la paz en, por ejemplo, la región del Dniéster y Ossetia del Sur.

92. Respecto a las tropas rusas estacionadas en el extranjero, especialmente en el Tadyikistán, su carácter jurídico viene definido por un acuerdo especial de 25 de mayo de 1993, que dispone que Tadyikistán delegará la defensa de sus fronteras con Afganistán y China a las unidades de defensa fronterizas de Rusia por un período de transición hasta que termine la formación de sus propias unidades de defensa. Ello está plenamente de acuerdo con el Tratado sobre la Seguridad Colectiva firmado el 15 de mayo de 1992 en Tashkent por Rusia y los países de Asia Central, entre los que figuran Tadyikistán y Armenia.

93. Prosiguen las medidas para el regreso de los refugiados a la república procedentes de Afganistán (desde que empezó la repatriación en masa de refugiados más de 30.000 personas han regresado al país, y quedan todavía unos 35.000-45.000 en Afganistán).

94. Pese al hecho de que el uso de las fuerzas armadas en el extranjero tiene ciertas consecuencias perjudiciales para Rusia, es todavía la única forma de salvar vidas.

Artículo 7

95. El no verse sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes está garantizado en la Constitución (párrafo 2 del artículo 21). El Código Penal dispone el castigo de las acciones que pueden calificarse de torturas y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículos 171, 179, 183). El artículo 5 de la Ley sobre "La Milicia" prohíbe a ésta "a recurrir a tratos degradantes". También figuran reglas parecidas en el Código de Trabajo Correctivo de la Federación de Rusia (artículos 116, 117) y otros textos legislativos.

96. Ya se ha hecho referencia a las penas impuestas a la violencia, expresadas en forma de privación ilegal de libertad. La Ley de 29 de abril de 1993 prevé una mayor responsabilidad para el secuestro, conjuntamente con la tortura y la injuria y otros actos que amenacen la vida o salud de la víctima (artículo 125-1 del Código Penal). Ello, sin embargo, no es motivo para creer que la situación en Rusia sea satisfactoria con respecto a la ausencia de torturas y otros tratos degradantes. Aquí debemos tener en cuenta las tradiciones de ideología de la justicia penal soviética todavía en existencia, el sentimiento público de justicia y otros factores que caen fuera de los límites de la Ley y vienen determinados por condiciones económicas. Las condiciones en que se mantiene a los prisioneros, fijadas en los instrumentos estatutarios, se acercan a la tortura y a los tratos degradantes. La legislación vigente ha sido objeto de reformas apreciables con la Ley de 6 de julio de 1993 "Enmiendas al Código Penal de la RSFSR y el Código de Trabajo Correctivo de la RSFSR" una Ley de 29 de abril de 1993 con el mismo título, y la Ley de 21 de julio de 1993 "Instituciones y Organos que Administran Penas en Forma de Privación de Libertad". Así, la Ley de 21 de julio de 1993 imponía al personal en el sistema correccional la obligación de notificar a los condenados y reos la intención de utilizar la fuerza física, medios especiales y armas, habiéndoles dado tiempo suficiente para responder a las demandas que se les hagan, y asegurar también

que sufran los daños menores posibles (artículo 28). Ello representa en conjunto un paso apreciable hacia la humanización del sistema penitenciario ruso, que lo acerca a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

97. La falta de un auténtico mecanismo para vigilar el sistema de los establecimientos correccionales constituye una circunstancia importante. La supervisión legal la lleva a cabo en la práctica la Oficina del Fiscal, lo que no asegura un nivel moderno de protección. La ola de huelgas y motines que se produjo en los establecimientos correccionales en otoño de 1991, los datos recogidos por las organizaciones públicas independientes, las amplias comprobaciones realizadas en setiembre de 1991 por el Comité de Derechos Humanos del Consejo Supremo de la Federación de Rusia contribuyeron en gran parte a las importantes enmiendas realizadas al Código de Trabajo Correccional en 1992-1993, enmiendas referentes al sistema y a las condiciones de detención, que tenían por finalidad asegurar que los prisioneros se verían libres de torturas y castigos. Al mismo tiempo, hay motivos para afirmar que los instrumentos estatutarios en su aplicación en las prisiones y otros establecimientos correccionales no garantizan suficientemente todavía la eliminación de la tortura y de tratos o penas inhumanos y degradantes.

98. Se ha producido una proliferación de comunicaciones por parte de individuos y asociaciones públicas (el Grupo Helsinki de Moscú, el Centro Social para la Promoción de la Reforma de la Justicia Penal, la Sociedad Contra la Pena de Muerte y la Tortura), así como comunicaciones en los medios de comunicación, referentes al uso de la tortura y otros métodos ilegales de investigación para los que no ha habido la respuesta adecuada por parte de la fiscalía. Las autoridades y las sucursales de las asociaciones públicas no utilizan todavía suficientemente los medios de protección de los derechos de los prisioneros y detenidos previstos por la Ley. El Comité de Seguridad de la Duma del Estado y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos se proponen formular medidas adicionales para impedir los casos de tortura en las prisiones especiales de los órganos del Ministerio del Interior.

99. La situación es parecida en el otro "sistema cerrado" -las fuerzas armadas- excepto que en la legislación y reglamentos militares existen escasas disposiciones para que ofrezcan las debidas garantías a los derechos de los miembros de las fuerzas armadas. Se están tomando medidas para democratizar el ejército y humanizar las relaciones militares. A tal fin, se están adoptando mecanismos en las fuerzas armadas para hacer responsables a los oficiales con mando de tropa de la aplicación de los derechos y libertades de los miembros de las fuerzas armadas, las consecuencias sociales de sus decisiones, y la participación de representantes de los soldados, marineros y aviadores para conseguir la protección social y jurídica de los miembros de las fuerzas armadas y sus familias.

100. Se están creando puestos en las unidades militares para abogados, sociólogos y psicólogos para que estudien la moral y el estado psicológico de los miembros de las fuerzas armadas, y prestar asistencia profesional a los jefes en su labor con el personal militar. En el reglamento militar general aprobado por el Presidente en diciembre de 1993 se declara que el respeto al individuo y a la dignidad nacional, y la preocupación por la protección social y jurídica de los miembros de las fuerzas armadas son las obligaciones más importantes de un jefe militar.

101. Para resolver este problema se han creado departamentos especiales como parte de la reorganización del mando militar, para mantener el enlace con las relaciones públicas, trabajar con los licenciados y jóvenes, y con los padres y familias de los militares. Se han establecido ahora estrechos contactos y se ha forjado la colaboración con casi todas las organizaciones públicas que ayudan a las fuerzas de la Federación de Rusia para abordar los agudos problemas sociales.

102. Los altos mandos del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia se reúnen regularmente con representantes del público, organizan debates de mesa redonda y reuniones sobre asuntos de actualidad referentes a la vida y actividad del ejército, apoyan y contribuyen a llevar a cabo programas de beneficencia (la construcción de viviendas para los miembros de las fuerzas armadas; reciclaje de los oficiales que pasan a la reserva; cuidados médicos para los militares que necesitan tratamiento; preparación de explotaciones agrícolas, etc.).

103. El proceso de regeneración democrática de la sociedad ha impuesto buscar nuevos caminos para asegurar el respeto a la dignidad humana, reforzando la protección social y jurídica de los militares y previniendo casos de su tratamiento cruel, inhumano y degradante.

104. El número de condenas por actitudes que constituyen una infracción de los reglamentos por parte de los superiores disminuyó el 24 por ciento en 1993, lo que concuerda con la evaluación oficial del resultado de las medidas adoptadas para mejorar la labor educativa en el ejército. Al mismo tiempo, el elevado nivel de lesiones, suicidios y deserciones de las fuerzas armadas, y los datos recopilados por las organizaciones no gubernamentales (en primer lugar la Unión de Madres de Soldados) constituyen la prueba de que la falta de respeto por la dignidad humana está muy extendida en el ejército, y puede suponerse con cierta confianza que la causa principal obedece a factores fuera de la Ley aun cuando hay leyes que regulan estas relaciones. En 1993, 20 miembros del ejército y de la marina murieron a consecuencia de la infracción de los reglamentos por parte de los superiores ("bullying"), se examinaron unos 2,000 casos dentro de esta figura y se procedió contra más de 2.500 militares.

105. La Constitución estipula que "nadie podrá ser sometido a experimentos médicos, científicos o de otra índole sin su consentimiento voluntario" (artículo 21). Las garantías para los derechos humanos en materia de medicina e investigación biomédica se encuentran también en varios textos legislativos, principalmente en los "Principios de la Legislación de la Federación de Rusia sobre la Protección de la Salud de sus Ciudadanos" que regula los derechos del paciente, el procedimiento para utilizar nuevos métodos de prevención y tratamiento, medicinas, preparados inmunobiológicos y desinfectantes, la investigación biomédica y el procedimiento para tomar órganos y tejidos humanos para ser transplantados (artículos 30, 43, y 47 de los Principios). En 1992 se promulgaron las leyes siguientes: "Cuidados Psiquiátricos y Garantías de los Derechos Civiles en su Prestación"; "Transplante de Organos o Tejidos Humanos"; "El Sistema de Donantes y la Transfusión de Sangre"; existe en preparación una ley sobre los derechos de los pacientes.

106. El principio del carácter voluntario del recurso a los servicios médicos es de importancia fundamental en esta legislación. Las excepciones a este principio que figuran en el párrafo 4 del artículo 11, en los párrafos 4 y 5 del artículo 23 y en el artículo 29 de la Ley "Cuidados Psiquiátricos y Garantías de

los Derechos Civiles en su Prestación" se deben en primer lugar a la protección de los intereses del individuo -del paciente- cuando un trastorno mental crea una amenaza directa para el paciente o para aquellos con los que el paciente está en contacto, cuando la negativa a aceptar el tratamiento afectaría la salud del paciente o cuando el trastorno mental no permite al paciente valerse por sí mismo. La Ley establece un sistema de protección estatal, pública y representativa para los derechos del individuo sometido al examen mental, cuando está en observación fuera del hospital y al recibir tratamiento hospitalario. En este último caso la Ley prohíbe la administración de fármacos como medio de castigar al que sufre un trastorno mental o en interés de otros individuos.

107. Hay dificultades para asegurar la aplicación de estos derechos en la práctica, sobre todo con respecto a la inaccesibilidad al control estatal en varias situaciones que dimanen de la investigación biomédica, y con la necesidad de utilizar medios delicados de regulación ética. La información a este respecto figura en un informe sobre bioética presentado por Rusia al Secretario General a instancias de éste en abril de 1994.

108. Estos problemas son discutidos activamente por la comunidad científica de Rusia para crear el Comité Nacional Ruso de Bioética y el Instituto del Ser Humano, dependiente de la Academia Rusa de Ciencias.

Artículo 8

109. La base constitucional de que una persona no pueda ser sometida a esclavitud ni servidumbre la constituye la declaración en la Constitución del principio que los seres humanos y los derechos y libertades humanos tienen el más alto valor (artículo 2); el reconocimiento de que las normas internacionales en la esfera de los derechos humanos tienen precedencia (párrafo 4 del artículo 25, párrafo 1 del artículo 17) que los derechos humanos y libertades son inalienables (párrafo 2 del artículo 17); y la confirmación del derecho a la libertad y a la inviolabilidad personal (párrafo 1 del artículo 22).

110. Aunque la legislación de Rusia no contiene ninguna regla especial dedicada a la esclavitud, las normas internacionales a este respecto constituyen "parte integral de su ordenamiento jurídico" (párrafo 4 del artículo 15 de la Constitución). Esta disposición se refiere principalmente a las obligaciones de Rusia en virtud del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. A partir de la ilegalidad de la violencia contra la persona, la legislación rusa protege a las mujeres, amparándolas contra las manifestaciones de los vestigios de costumbres locales que colocan a la mujer en una posición dependiente, como ocurre en especial con el rapto de mujeres con el fin de casarse con ellas (artículo 233 del Código Penal). Las penas previstas para la privación ilegal de libertad constituyen igualmente garantías contra la esclavitud.

111. Respecto a las formas modernas de esclavitud tales como el tráfico de niños y la pornografía infantil, no se dispone en Rusia de estadísticas a este respecto. La comprobación de las noticias de prensa acerca de la adopción internacional de niños con carácter comercial, no ha permitido confirmar que la práctica de la adopción internacional, que carece de la base jurídica necesaria aunque se lleva a cabo bajo la supervisión de las autoridades rusas, tenga carácter criminal. El examen de los casos de la venta de niños cuando se tenía la sospecha de que éstos eran utilizados como donantes de órganos o tejidos para

el trasplante no ha permitido tampoco tener fundamentos para interponer acciones en virtud de la Ley de 22 de diciembre de 1992 "Trasplante de Organos o Tejidos Humanos". Durante el período 1990-1992 se procesó a 1.191 personas acusadas de utilizar a menores en actividades criminales, embriaguez, la mendicidad habitual, la prostitución y los juegos de azar, así como la explotación de menores con el fin de vivir una existencia parasitaria.

112. Una Ley del 5 de diciembre de 1991 suprimió el artículo 209 del Código Penal, que preveía la responsabilidad por "vagabundeo, la mendicidad como ocupación, o por llevar cualquier otro tipo de vida parasitario", que se había invocado para procesar a los disidentes.

113. La legislación rusa no prevé la responsabilidad penal por la prostitución, que ignora el concepto de "prostitución como ocupación". Sin embargo, la utilización de menores en la prostitución como ocupación y el mantenimiento de antros de vicio y el proxenetismo son punibles por la ley en virtud de los artículos 210 y 226 del Código Penal. Una niña menor de edad que se dedique a la prostitución no incurre en responsabilidad penal. Las mujeres que practican la prostitución pueden incurrir en responsabilidad administrativa en virtud del artículo 164-2 del Código de Delitos Administrativos y recibir una multa. No existe ningún departamento u órgano especial a nivel ejecutivo en Rusia encargado de combatir la prostitución. Únicamente cuando se comete un delito se invocan las circunstancias de mantener antros de vicio y atraer a los menores a la prostitución. La falta de estadísticas fidedignas acerca del número de mujeres dedicadas a la prostitución impide igualmente evaluar la escala de este fenómeno.

114. La protección contra los trabajos forzados está garantizada en la Constitución por una prohibición directa de dicho tipo de trabajo (párrafo 2 del artículo 37), además de la declaración en la misma del derecho al trabajo (párrafo 1 del artículo 37). Habiendo reconocido sus obligaciones dentro del Convenio n° 29 de la OIT (Convenio referente al trabajo forzado u obligatorio) Rusia toma la vigencia de sus disposiciones como punto de partida. El incumplimiento de la legislación laboral es perseguible por la ley en virtud del Código Penal (artículo 138).

115. La prueba de que el trabajo de los prisioneros en los establecimientos correccionales está siendo humanizado la constituye la concesión a dichos establecimientos, al amparo de la Ley de 21 de julio de 1993 "Instituciones y Organos que Administran Penas en Deprivación de Libertad), del derecho a emplear a los reclusos en trabajos de acuerdo con su aptitud para ellos y, cuando sea posible, sus calificaciones (artículos 14 y 15 en el contexto de las demandas para controlar la actividad del trabajo correccional (artículo 38). A ello puede agregarse la derogación, en virtud de la misma Ley, de la legislación sobre la rehabilitación por el trabajo de los drogadictos y alcohólicos crónicos. Una importante característica de esta Ley es el reconocimiento de que "la actividad del sistema de trabajo correccional se llevará a cabo de conformidad con los principios de legalidad, humanismo y respeto a los derechos humanos" (artículo 1).

116. La corrección de los reclusos no está subordinada al objetivo de aprovecharse del trabajo de los convictos. La práctica que existió durante muchas décadas de retener el 50 por ciento de sus ganancias para el

mantenimiento de los establecimientos de trabajos correccionales, ha sido suprimida. A los convictos se les ofrece la posibilidad del trabajo individual.

Artículo 9

117. El derecho a la libertad y a la integridad física de las personas está garantizado en el artículo 22 de la Constitución:

- "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
- "2. El arresto, y la prisión preventiva se permitirán únicamente por decisión judicial. Sin una orden judicial nadie puede estar detenido por un período superior a 48 horas."

118. En virtud del artículo 5 de la Ley "La Milicia" ("Actividades de la milicia y los derechos humanos") la milicia no podrá imponer restricción alguna a los derechos y libertades de los ciudadanos excepto por los motivos y en la manera prevista por la ley.

119. El artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal prevé la posibilidad de arresto con la aprobación del fiscal. Sin embargo, el arresto basado en una orden judicial es cada vez más frecuente. En 1993 unas 40.000 personas acusadas de cometer un delito a las que el juez de instrucción había dejado en libertad ingresaron en prisión por una decisión judicial superior; hubo 53.874 apelaciones contra la legalidad del arresto y sus motivos. Sin embargo, existen casos todavía de incumplimiento del párrafo 2 del artículo 9 del Pacto según el cual el arrestado debe ser informado rápidamente de los cargos que se le imputan.

120. A este respecto debe afirmarse que la legislación y la práctica rusas no coinciden enteramente con el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto, que dispone que toda persona detenida debe ser puesta a disposición del juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer las funciones judiciales. Este procedimiento -que es una de las garantías más antiguas contra las medidas arbitrarias de las autoridades- está reflejado en el párrafo 2 del artículo 22 de la Constitución pero es todavía aceptado con dificultad por la práctica jurídica tradicional rusa que no admite comunicar al detenido la finalidad del sumario mientras éste está en proceso de instrucción. En Rusia se opina que sustituir la intervención del Ministerio Fiscal por la supervisión de los tribunales equivaldría a reconocer que éstos actúan como ramas del poder ejecutivo, lo que estaría en flagrante contradicción con la Constitución de la Federación de Rusia y el principio de la separación de poderes.

121. Algunas de las enmiendas de la ley de enjuiciamiento criminal adoptadas en 1992 amplían la esfera del control judicial y acercan el juicio penal a los principios del procedimiento contradictorio. En especial, la Ley de la Federación de Rusia de 23 de mayo de 1992 "Enmiendas y Adiciones al Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR" introdujo el procedimiento de apelación y verificación judicial de la legalidad y motivos de la detención preventiva como una restricción preventiva y amplió el derecho de defensa. La misma Ley resolvió otro importante asunto referente a la supervisión de la prórroga del período de detención. Se mantiene el antiguo procedimiento extrajudicial de prórroga pero al mismo tiempo el detenido tiene el derecho a apelar contra la

decisión del tribunal, y el juez tiene la obligación de entender de la apelación dentro de tres días de haber recibido las pruebas necesarias.

122. En virtud de esta Ley (párrafos 1 y 2 del artículo 220 del Código de Enjuiciamiento Criminal según el texto contenido en la Ley de 23 de mayo de 1992) la apelación contra la prisión preventiva dictada por un órgano investigador, juez de instrucción o fiscal, así como contra la prórroga de dicha prisión, será presentado al tribunal por la persona en prisión preventiva, el abogado defensor o el representante jurídico directamente o a través de la persona que lleva a cabo la investigación, juez de instrucción o el fiscal. La persona que lleva a cabo la investigación, juez instructor y el fiscal estarán obligados a transmitir la apelación al tribunal en el plazo de 24 horas, junto con los motivos de la prisión o su prórroga, agregando aclaraciones en caso necesario. En caso de que la apelación se haya presentado a la administración del lugar de la prisión preventiva, el fiscal tiene la obligación de transmitir al tribunal los motivos y aclaraciones mencionados dentro de las 24 horas del tiempo de recepción de la notificación en el lugar en que la persona se encuentra detenida.

123. La Ley especifica que hasta el momento en que se haya visto la apelación la presentación de ésta no tiene efectos suspensivos, es decir, no entraña la liberación de la persona detenida a menos que se considere necesario por la persona que lleva a cabo la investigación, el juez instructor o el fiscal. La Ley establece también el procedimiento para la revisión judicial de la legalidad y motivos de la prisión preventiva o de su prórroga.

124. La comprobación judicial de la legalidad de los motivos que indujeron a ordenar la prisión preventiva y de la legalidad y motivos de su prórroga se hará llevar a cabo por el tribunal del lugar en que la persona ingresada en prisión en el plazo de tres días a partir del día de la recepción de las pruebas necesarias. La comprobación judicial de la legalidad y de los motivos que indujeron a la prórroga de la prisión preventiva en ausencia de la persona detenida se permitirá en circunstancias excepcionales cuando dicha persona solicite que la apelación sea tratada en su ausencia o rehuse por propia iniciativa intervenir en el procedimiento.

125. En la vista del asunto el juez explicará a los comparecientes sus derechos y obligaciones. El apelante, caso de encontrarse presente en la vista, explicará sus motivos después de haber sido oídas las demás personas.

126. A resultas de la comprobación judicial el juez decretará la suspensión de la prisión preventiva y la persona detenida será puesta en libertad o bien declarará que ha sido rechazada la apelación. En el caso de que no se hayan presentado pruebas de la legalidad o motivos para decretar la prisión preventiva el juez ordenará igualmente la suspensión de la prisión y la persona será puesta en libertad. Al mismo tiempo en que el juez anule la orden de prisión preventiva, podrá elegir cualquier otra medida preventiva prevista por la ley.

127. En el caso de que se dicte la decisión de anular la orden de prisión preventiva, se enviará copia de la misma al fiscal para su rápida ejecución. En caso en que la persona detenida se encuentre presente en la vista, su liberación se llevará a cabo inmediatamente en la misma sala. La orden de prisión preventiva de nuevo para la misma persona una vez el juez haya anulado la orden inicial será posible únicamente cuando se descubran nuevas circunstancias que

indiquen que la persona debe seguir en prisión. La nueva orden podrá ser apelada nuevamente ante el tribunal por motivos generales.

128. El párrafo 5 del artículo 9 del Pacto prevé el pago de una indemnización a toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa. En los artículos 52 y 53 de la Constitución figuran normas parecidas. Este derecho está garantizado también por las normas contenidas actualmente en el Decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS desde el 18 de mayo de 1981 sobre "El Pago de Indemnización por los Daños Causados a los Ciudadanos como Consecuencia de los Actos Ilícitos de las Organizaciones Estatal y Sociales y por Funcionarios Públicos en el Desempeño de sus Funciones". El Código de Enjuiciamiento Criminal de la Federación de Rusia contiene el artículo 178 que dispone la responsabilidad por la detención o prisión claramente ilegales.

129. El párrafo 4 del artículo 9 del Pacto contiene una definición del derecho a que el caso sea visto por un tribunal independiente e imparcial. Todos los derechos enumerados están garantizados con mayor o menor detalle en la Constitución (párrafo 1 del artículo 63, párrafo 1 del artículo 65 y párrafo 1 del artículo 67) y no se han advertido contradicciones formales a nivel constitucional. Ello se explica en parte por la brevedad de la norma del Pacto, que no indica con detalle, por ejemplo, qué se entiende por "un tribunal independiente e imparcial".

130. Por otro lado, la legislación sobre el poder judicial y la fiscalía general, así como los procedimientos y prácticas no coinciden con la Constitución en todos los aspectos. La situación resulta paradójica en cierto modo en cuanto no es solamente la legislación adoptada durante el período soviético sino también la promulgada últimamente en Rusia la que está en pugna con la Constitución, las normas internacionales y el Concepto de Reforma Judicial adoptado por el parlamento. Cabe citar como ejemplo la Ley del 17 de enero de 1992 titulada "La Fiscalía General" que tiene como objeto principal reforzar el sistema actual de fiscalías y retener el modelo tradicional soviético de procedimientos legales.

131. El artículo 19 de la Constitución establece la igualdad de las partes ante la ley y los tribunales. De conformidad con el artículo 429 del Código de Enjuiciamiento Criminal la vista preliminar y el sistema de jurado, que no son universales todavía, se basan en el principio del juicio contradictorio. Al mismo tiempo, los juicios penales en Rusia no tienen carácter contradictorio en otros aspectos, sino que son una variante soviética específica del juicio sumarial, cuya característica principal es que el carácter y actitud del tribunal tienden a inclinarse por el lado de la acusación. La participación del fiscal como acusador público en las sesiones del tribunal no es obligatoria (párrafo 1 del artículo 31 de la Ley "El Ministerio Fiscal"), lo que puede implicar la posibilidad de que las funciones de la acusación se transfieran al tribunal.

132. La legislación procesal en vigor asegura también el carácter investigador del juicio. Así, el artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación del tribunal de instruir una causa cuando se descubran indicios de criminalidad. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 248 de dicho Código, la negativa del fiscal a dictar el procesamiento no exime al tribunal de continuar la instrucción de la causa.

133. El principio de la igualdad de las partes ante el tribunal es incompatible con la Ley "El Ministerio Fiscal" que establece una ventaja de la acusación sobre la defensa. En virtud del artículo 32 el fiscal puede protestar contra la ejecución del veredicto, conclusiones u órdenes del tribunal. En este caso es obligatorio examinar la protesta del fiscal, mientras que la apelación de la defensa contra la ejecución de una decisión no tiene consecuencias jurídicas preceptivas.

134. La necesidad de esforzarse más para que el principio del juicio contradictorio sea más eficaz en la práctica de la justicia penal rusa se desprende también de las estadísticas judiciales: hay muy pocas absoluciones (menos del 1 por ciento). La necesidad de que las causas sean examinadas por un tribunal independiente e imparcial y para asegurar la presunción de inocencia impone unas exigencias estrictas a la autenticidad de la información sobre la que se base la decisión jurídica y sobre la fiabilidad e irreprochabilidad del procedimiento. La práctica jurídica, sin embargo, sigue los artículos 342 y 345 del Código del Enjuiciamiento Criminal de la Federación de Rusia que dispone la anulación de una decisión del tribunal únicamente en el caso en que se hayan producido "infracciones importantes de la ley de procedimiento penal". La erosión gradual de la distinción entre la utilización en los juicios de la información obtenida en forma procesalmente correcta o no es todavía más perjudicial. A esta conclusión puede llegarse por el análisis del artículo 10 de la Ley de 13 de marzo de 1992 "Encuestas Operacionales en la Federación de Rusia". La Ley indica que una de las formas posibles de utilizar los resultados de una instrucción es "como prueba en las causas penales, después de la verificación de su conformidad con la legislación del procedimiento criminal". Así pues, el tribunal se limita a comprobar esta información, la analiza y puede utilizarla como prueba, aun cuando no fuera obtenida de acuerdo con el procedimiento. Una vez más se trata de un juicio inquisitorio e investigativo pero no contradictorio. El artículo 10 de la misma Ley puede "provocar" toda una serie de demandas de información que son aceptadas como prueba y pueden constituir la base de una decisión del tribunal. Si bien no se ha procedido todavía a una evaluación de la práctica legal a este respecto, la amenaza potencial de esta norma es evidente.

135. Debe tomarse nota en especial de otro aspecto propio del sistema de jurisdicción "soviético", que reduce considerablemente el derecho de los ciudadanos a la protección judicial de sus derechos, a saber, el lugar desproporcionadamente importante que ocupa el Ministerio Fiscal en el sistema de órganos que administran justicia y garantizan los derechos civiles. En virtud de la Ley sobre el Ministerio Fiscal, éste es responsable de vigilar que las leyes vigentes se apliquen rigurosa y uniformemente en la Federación de Rusia, incluido el derecho de apelar contra la ejecución de las decisiones y sentencias de los tribunales (artículos 4 y 5 de la Ley sobre el Ministerio Fiscal). No solamente estas funciones no figuran escritas en el sistema jurídico democrático sino que contradicen flagrantemente uno de los principios básicos del orden constitucional consagrado en el artículo 10 de la Constitución, la separación de poderes.

136. Las funciones de supervisión del Ministerio Fiscal sustituyen la comprobación judicial de la legalidad y motivos de la actuación de la milicia y los cuerpos de seguridad, incluidas sus intervenciones en asuntos tan delicados como la interferencia en la vida privada, el secreto de la correspondencia y las conversaciones telefónicas, etc. La esfera de las atribuciones judiciales queda

restringida y es ocupada por el Ministerio Fiscal, es decir, por un departamento que en la práctica no es ni legislativo ni ejecutivo. Ello es especialmente intolerable por cuanto al ejercer la supervisión de la legalidad de las diligencias operacionales, la investigación y la instrucción de la causa, el Ministerio Fiscal también actúa como parte que apoya a la acusación estatal en los juicios. Ello inclina evidentemente todo el sistema de justicia hacia la acusación y diluye aun las garantías de los derechos civiles previstos por el Código de Enjuiciamiento Criminal de la Federación de Rusia.

137. Actualmente tiene lugar en Rusia la revisión del sistema vigente, por el cual la supervisión del Ministerio Fiscal se combina con su función de parte acusadora, con miras a asegurar el derecho a un juicio justo por parte de un tribunal independiente e imparcial. A este respecto, hemos adoptado la Ley de 23 de mayo de 1992, mencionada anteriormente, la Ley "Enmiendas y Adiciones a la Ley de la RSFSR 'el Sistema Judicial de la RSFSR, el Código de Enjuiciamiento Criminal y el Código de Enjuiciamiento Civil de la RSFSR'" de 29 de mayo de 1992, y la Ley "Condición Jurídica de los Jueces en la Federación de Rusia" de 26 de junio de 1992. La primera de estas leyes modificaba, por ejemplo, el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Criminal referente al derecho del acusado a pedir la comparecencia de testigos adicionales y otras pruebas. Estas solicitudes se han resuelto satisfactoriamente en todos los casos, lo que está de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. La Ley adoptada sobre "Situación Jurídica de los Jueces" es de importancia excepcional por cuanto constituye un importante paso para asegurar la independencia de los jueces. Sin embargo, en la aplicación de la Ley deberán abordarse graves problemas referentes a los candidatos calificados, al igual que el hecho de que la parte más progresiva está en pugna con la Constitución, en la que los cambios menos numerosos en los últimos años corresponden al Capítulo 7 "El Poder Judicial".

138. El artículo 1 de la Ley "La Milicia" define la milicia como un conjunto de órganos estatales del poder ejecutivo, cuyo principal propósito es proteger la vida, salud, derechos y libertades de los ciudadanos frente a las infracciones criminales y otras infracciones. Además, regula las obligaciones y facultades de los miembros de la milicia, incluidos los motivos y procedimientos para utilizar la fuerza, medios especiales y armas de fuego (artículos 12-15).

139. Las actividades de la milicia son vigiladas tanto internamente como por las administraciones locales y órganos públicos. Además, el Fiscal General de Rusia y los demás fiscales subordinados a él supervisan la legalidad de la actividad de la milicia.

140. De conformidad con el artículo 39 de la Ley "La Milicia" un ciudadano que considere que la acción o inactividad de un miembro de la milicia ha infringido sus derechos, libertades e intereses jurídicos, tiene derecho a quejarse a los órganos superiores o a un funcionario de la milicia, procurador o a un tribunal. Los miembros de la milicia son responsables de los actos ilegales cometidos.

141. La Ley de 27 de abril de 1993 "Procedimientos Legales Contra las Acciones y Decisiones que Infringen los Derechos Civiles y Libertades" ofrecen a todo individuo la garantía legal de una protección contra los actos ilícitos por parte de órganos del Ministerio del Interior y de sus funcionarios, especialmente cuando recurren a medidas coercitivas. En el caso de que dichos órganos del Ministerio del Interior utilizaran medidas ilegales o infundadas de carácter administrativo y coercitivo, las personas cuyos derechos se hayan

infringido tienen derecho a protestar contra dichas medidas al tribunal. Este, cuando haya establecido la ilegalidad o falta de fundamento de aquellas medidas, restaurará los derechos de los ciudadanos, tomará las medidas necesarias para asegurar que dichas infracciones no se cometan de nuevo y, en caso necesario, concederá una indemnización que deberán pagar los órganos del Ministerio de Interior para compensar a las víctimas por los daños materiales y morales sufridos (artículo 447 del Código Civil de la RSFSR).

142. En apoyo de las disposiciones básicas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se adoptó una Ley "Enmiendas y Adiciones al Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR" el 23 de mayo de 1992, algunas de cuyas novedades van dirigidas a proteger los derechos y libertades del individuo en la justicia criminal. Así, el párrafo 2 del artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR estipula que una persona detenida tiene derecho a apelar para conseguir la verificación jurídica de la legalidad de su detención. En el caso de que el juez dictara la liberación de la persona a raíz del examen jurídico realizado, dicho fallo será ejecutado puntualmente (véase la sección del informe referente al artículo 26 del Pacto para más detalles).

143. Al abordar las cuestiones referentes a la mejora del sistema para la apelación contra las acciones de los órganos estatales, el Pleno del Tribunal Supremo adoptó una decisión del 27 de abril de 1993 "Práctica de la Comprobación Legal de la Legalidad y Motivos para Detener y Prorrogar el Período de Prisión Preventiva" (artículos 220-1 y 220-2 del Código del Enjuiciamiento Criminal). La determinación de la legalidad en este campo corresponde al parlamento. El decreto nº 101-1 GD de la Duma del Estado de la Asamblea Federal de 26 de abril de 1994 aprobó el "Estatuto de la Comisión de la Duma del Estado para verificar las infracciones de los derechos humanos con respecto a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido un crimen que se encuentran en prisión preventiva en las cárceles del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia". Se ha asignado tiempo al parlamento para que examine la legislación vigente a este respecto y compruebe la correspondencia de la Constitución con las normas internacionales.

Artículo 10

144. En la actualidad hay 600.000 convictos en las colonias penitenciarias de Rusia, más de 233.600 reos y personas procesadas en las prisiones ordinarias y prisiones de investigación especial. Las garantías de los derechos de las personas privadas de libertad de que serán tratadas con humanidad y respeto por su dignidad humana están consagradas en forma general en varios de las disposiciones de la Constitución referentes a los derechos y libertades humanos y civiles (capítulo 2) y también en el Código de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de 21 de julio de 1993 "Instituciones y Organos que Administran Penas de Privación de Libertad" que funciona "con arreglo a los principios de legalidad, humanismo y respeto por los derechos humanos" (artículo 1).

145. Dentro de las exigencias de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Prisioneros, la Ley de 12 de junio de 1992 "Enmiendas y Adiciones al Código de Trabajo Correccional de la RSFSR, el Código Penal de la RSFSR y el Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR" dispone una amplia serie de medidas encaminadas a democratizar el sistema penitenciario del país y garantizar los derechos civiles de los prisioneros. Dichos cambios determinan la tendencia general de la reforma del régimen penitenciario, la transición de duras medidas

de castigo en el trato de los prisioneros a un amplio estímulo de conducta respetuosa con la ley. Las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal sobre la suspensión del cumplimiento de condenas han sido enmendadas de conformidad con dicha Ley (artículo 361 del Código de Enjuiciamiento Criminal).

146. El cumplimiento de una sentencia de privación de libertad o del trabajo correccional podrá suspenderse en las condiciones siguientes: enfermedad grave del penado, hasta su recuperación; cuando la mujer condenada esté embarazada o tenga niños de corta edad, hasta que el hijo menor tenga tres años; y también la suspensión por un período especificado por el tribunal cuando el cumplimiento de la sentencia pueda ocasionar consecuencias angustiosas para el reo o su familia.

147. De conformidad con el artículo 10 del Pacto, la Ley prevé medidas para humanizar y diferenciar el régimen al que están sometidos los reos, y para el respecto de los derechos humanos fundamentales y el acercamiento de las condiciones del prisionero a las normas internacionales.

148. Se han introducido nuevas cláusulas en el Código de Trabajo Correccional que rigen las garantías de libertad de conciencia a los convictos y su derecho a la integridad física, garantías de cuyo cumplimiento es responsable el jefe del establecimiento correccional. Es posible la implantación de un régimen especial en lugares de detención para evitar la amenaza directa a la vida y salud de los convictos (artículo 23-1 del Código de Trabajo Correccional de la RSFSR). Se ha establecido la diferenciación de condiciones en las secciones preventivas locales, en las que se mantendrán incomunicados a los que perturben el orden persistentemente y a los jefes de la fraternidad criminal.

149. Con respecto a la abolición del régimen de condiciones más rigurosas (6.7.1993) los prisioneros condenados a este régimen suelen enviarse ahora a los lugares de detención de régimen general (es decir, menos riguroso).

150. Con respecto a la humanización de las condiciones de detención en conjunción con la aplicación del artículo 10 del Pacto, los reclusos han empezado a gozar de relaciones más estrechas con sus parientes y conocidos mediante conversaciones telefónicas, se han levantado las restricciones sobre la correspondencia, los detenidos pueden recibir obras literarias, otras publicaciones y giros postales sin restricción y se ha aumentado el número de las visitas tanto cortas como largas, así como el número de paquetes, envíos y periódicos que pueden recibir (véase también el texto referente a los artículos 12 y 18 del Pacto). Los reclusos pueden recibir alimentos y artículos de primera necesidad de sus parientes con carácter mensual. Se facilitan mayores oportunidades para la compra complementaria de alimentos y otros bienes en las tiendas de los establecimientos correccionales. Los detenidos no pueden ya ser castigados, como ocurría anteriormente, a raciones alimentarias reducidas o privados de comida adicional por infracciones del régimen al que han sido condenados o por su actitud negligente hacia el trabajo. Están suprimidos los castigos en forma de pérdida de privilegios (visitas, paquetes, envíos) y el rapado de la cabeza.

151. Varias disposiciones están encaminadas a proteger los intereses económicos de los reclusos y su rehabilitación social. Existe la intención de utilizar el trabajo de los convictos en empresas de distinto régimen de propiedad (véase también en relación al artículo 8 del Pacto). Se han introducido vacaciones anuales pagadas para los reclusos con salida o no de los límites de los

establecimientos correccionales, (artículo 38 del CLC de la RSFSR), como por ejemplo, las que disfrutaban en instalaciones preventivas sanitarias establecidas en los penales.

152. Se ha establecido un sistema de seguridad social para varias categorías de penados (artículo 42 del CLC de la RSFSR). Los reclusos que trabajan por primera vez tienen el derecho a que el trabajo realizado durante el cumplimiento de la sentencia les sirva como tiempo trabajado para recibir una pensión.

153. Los derechos y privilegios de las mujeres reclusas (de las cuales hay 21.600) se han ampliado considerablemente, en especial los de las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos de corta edad. Estas mujeres gozan ahora de mejores condiciones de vida y se les facilitan mayores raciones alimentarias.

154. Desde 1992 las condenas de las mujeres embarazadas y de las mujeres con hijos menores de tres años se han aplazado, excepto para las mujeres condenadas por delitos graves y que han recibido una sentencia de más de cinco años. La mujeres que tienen hijos en los hogares establecidos en los penales tienen derecho a una subvención de subsistencia para los hijos y a las que tienen hijos de menos de tres años se les permite vivir fuera del penal. Igualmente, las mujeres convictas pueden utilizar su propia ropa.

155. Como la edad de responsabilidad penal en Rusia es de 14 años, los delincuentes menores de dicha edad no cumplen la sentencia en los establecimientos penales. Los menores en prisiones de investigación especiales y los convictos en las colonias de trabajo correctivo (de las que hay 59 en las que cumplen sentencia 19.100 personas) están separados de los adultos. Existen disposiciones legislativas por las que gozan de mejores condiciones que los adultos. Por los Decretos gubernamentales n° 409 de 20 de junio de 1992 y n° 610 de 21 de agosto de 1992 se les conceden mejores raciones alimenticias. La educación es el aspecto principal del trabajo de los menores. Cada penal tiene una escuela general y una escuela de formación profesional. Prácticamente casi todos los menores tienen la posibilidad de aumentar su nivel de educación general y de aprender un oficio a su puesta en libertad. Es práctica corriente permitir a los menores salir del penal para asistir a actividades culturales y deportivas.

156. La Ley impone por primera vez al personal de los establecimientos correccionales la obligación de observar la ética profesional, de ser humanitarios en su actitud ante los convictos y no permitir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

157. Las condiciones en que viven realmente las personas privadas de libertad constituyen, sin embargo, un motivo de preocupación para las autoridades rusas, que debido a factores económicos no pueden realizar un cambio radical de la situación en los lugares de detención. Se admite que es imposible en un futuro previsible cumplir la recomendación del artículo 9 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de que cada recluso tenga una celda para sí sólo. En las prisiones de investigación especial de Rusia han surgido condiciones muy desfavorables. El aumento de la criminalidad ha llevado al hacinamiento en los establecimientos actuales, que tienen una capacidad para 167.800 personas y albergan en realidad 234.300. Cada persona dispone de menos de un metro cuadrado de espacio en lugar de los dos y medio previstos; salas previstas para 20 personas todavía no condenadas contienen en realidad 60 o más, mientras otros

se encuentran en barracones que albergan 100. Las condiciones de vida de los convictos en los penales correccionales es considerablemente mejor ya que tienen derecho a 2 m² pero cada persona dispone de un promedio de 2,75 m². Sin embargo, de conformidad con exigencias de espacio previstas en los reglamentos vigentes, 20 penales correccionales del Ministerio del Interior y del Departamento de Asuntos Internos de Rusia carecen de espacio, para 450 de sus reclusos por término medio (penales de Altai, Stavropol, Krasnodar y Krasnoyarsk y de las provincias (oblasts) de Irkutsk, Rostov y Samara, Tatarstán, Yakutia y otras). Los penales correccionales carecen de cantinas y agua corriente y sistemas de drenaje. Dos tercios de las 177 prisiones de investigación especial y prisiones ordinarias datan de los siglos XVII a XIX y se encuentran muy deterioradas. La inflación y el descenso de la producción han dado lugar a que unos 200.000 convictos se encuentren sin trabajo y hay escasez de combustible y medios económicos. Los establecimientos del sistema correccional experimentan grandes dificultades para facilitar la alimentación, tratamiento médico y las condiciones de vida de las personas detenidas y convictas. El costo de los alimentos, medicamentos y bienes de consumo crece continuamente. A resultas de ello la mayor parte de las subdivisiones se encuentran endeudadas con carácter crónico ante sus suministradores y no pueden llevar a cabo las reparaciones y reformas prontamente ni realizar nuevos trabajos de construcción.

158. La suavización del control de precios ha reducido grandemente las posibilidades de mantener los anticuados edificios de las escuelas generales en los establecimientos para menores delincuentes a su nivel anterior. No se han asignado recursos para la compra de libros de texto, material escolar y equipo. Hay de 4 a 5 libros de texto de promedio por cada 20 alumnos y apenas material escolar para clases adicionales.

159. La grave situación de las prisiones y penales viene agravada por la composición de la población de penados (uno de cada cuatro ha sido condenado por asesinato premeditado o lesiones graves; uno de cada cinco por robo con violencia, robo o violación; más del 60 por ciento han sido condenados más de una vez; y 60.000 personas están consideradas como reincidentes peligrosos). En consecuencia, el sistema penitenciario ruso pasa por uno de los períodos más difíciles de su existencia. Todas las crisis que han surgido en la sociedad rusa se manifiestan de una forma más aguda y concentrada en el funcionamiento del sistema.

160. Las condiciones sociopolíticas y económicas que están surgiendo en Rusia exigen cambios radicales de la política penal y correccional, y la adopción de nuevas leyes. La necesidad de reformar el sistema penal-represivo viene dictada también por los cambios fundamentales que tiene lugar en las estructuras oficial, económica y pública del país. Atendiendo a este hecho, el Gobierno adoptó un Decreto para asignar mayores recursos a las prisiones de investigación especial y a las prisiones ordinarias, cuya realización dependerá de que se disponga de los fondos apropiados.

161. Se están adoptando medidas para mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en prisión preventiva y de los convictos en prisiones y establecimientos de trabajo correccional. Se están construyendo nuevos establecimientos y los actuales se reforman en la medida permitida por los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda ruso. Sin embargo, dichos recursos son claramente insuficientes para solucionar realmente el problema de alojar a los prisioneros que se encuentran en prisión preventiva.

162. En 1994 el Ministerio de Hacienda ruso asignó fondos para sufragar el 25 por ciento de los gastos previstos por el Decreto n° 1355 del Gobierno ruso.

163. Está en marcha la conversión de 35 antiguos centros de tratamiento del alcoholismo en los que el tratamiento se combinaba con el trabajo y la de penales correccionales en prisiones preventivas. Ello liberará unos 23.000 puestos. Cuarenta de estos centros se equiparán para funcionar como penales correccionales y cuatro centros y una ciudad militarizada como colonias de formación y trabajo.

164. Se está preparando un programa federal para la construcción y modificación de las cárceles de detención preventiva y las cárceles generales hasta el año 2000; se trata de convertir 134 de los establecimientos actuales y construir 60 nuevas cárceles de prisión preventiva. Cuando este programa esté terminado se dispondrá de espacio para 50.000-60.000 personas más.

165. Se ha proclamado una amnistía inspirada en la actitud humanitaria hacia las personas condenadas por los delitos que no constituyen una grave amenaza para la sociedad y también con motivo de la adopción de la nueva Constitución. De acuerdo con los cálculos provisionales, se liberará a 20.000 de los delincuentes menos peligrosos. Lo que es más importante, la amnistía beneficiará a personas incapacitadas de las categorías 1 y 2, personas en edad de jubilación que tomaron parte en la defensa de la Patria, mujeres, menores y personas condenadas hasta tres años de privación de libertad que han cumplido por lo menos un tercio de su sentencia.

166. Además, se ha acortado el período de detención de 25.000 penados.

167. Ante todas estas dificultades, las administraciones de los lugares de detención hacen todo lo posible para asegurar el abastecimiento de bienes de consumo, alimentos y cuidados médicos a los niveles estipulados.

168. El Ministerio de Asuntos Interiores ruso vigila continuamente la observancia del régimen de reclusión de los reos, y también de los sospechosos y personas acusadas de haber cometido un delito. Se realizan comprobaciones regularmente durante las cuales los miembros y personal del ministerio, acompañados de representantes de los órganos ejecutivos y legislativos, realizan visitas a los establecimientos. Todo indicio de que se haya quebrantado la ley o de que los delincuentes hayan sido sometidos a un trato inhumano debe ser objeto de una investigación a fondo y los culpables deben ser sometidos a rigurosas medidas disciplinarias o procesados. Así, en el transcurso de 1993, las secciones del Ministerio Fiscal reconocieron que se habían utilizado irregularmente medios especiales contra los convictos (porras de caucho, colocación de esposas, gases lacrimógenos) en 23 casos en los penales correccionales y en un caso en una colonia de rehabilitación. Se tomaron medidas disciplinarias rigurosas contra los culpables. Sin embargo, los círculos parlamentarios y la opinión pública consideran que la situación no es todavía aceptable. La necesidad de adoptar medidas urgentes para rectificar la situación viene manifestada por los numerosos testimonios aparecidos en la prensa.

Artículo 11

169. La legislación de Rusia no contiene disposición alguna para imponer una pena de privación de libertad a una persona que no haya cumplido sus obligaciones contractuales. En el Código Civil se refleja el carácter inadmisibles de dicha privación de libertad.

Artículo 12

170. El derecho a la libertad de movimientos en el país y a la libertad de elegir un lugar de residencia dentro del mismo está consagrado en el párrafo 1 del artículo 27 de la Constitución.

171. La Ley "Derechos de los Ciudadanos de la Federación de Rusia a la Libertad de Movimientos y de Elección del Lugar de Residencia Temporal o Permanente dentro de la Federación de Rusia", entró en vigor el 1 de octubre de 1993, y señaló el principio de la extinción gradual del antipopular sistema de pases. El objeto de dicha Ley es suprimir el sistema de prohibiciones y permisos y establecer un sistema libre que no exige más que los ciudadanos rusos se inscriban en un registro determinado. De conformidad con el artículo 2 de la Ley toda restricción al derecho de los ciudadanos rusos a la libertad de movimientos y a la elección del lugar de residencia temporal o permanente dentro de Rusia se permite únicamente en las circunstancias previstas por la ley. Con arreglo al artículo 9 de la Ley dicho derecho puede restringirse en las zonas fronterizas, en ciudades militares impermeabilizadas, zonas administrativas cerradas, zonas de desastres ambientales y en algunos territorios y zonas urbanas para las que se hayan introducido condiciones especiales y un régimen determinado de vida y actividad económica en el caso de que exista el riesgo de la transmisión de enfermedades comunicables y altamente prevalentes no comunicables y envenenamiento y también en los territorios en los que se haya declarado el estado de excepción o de guerra. En virtud del artículo 2 de dicha Ley el derecho de movimientos también se amplía a los extranjeros y apátridas, de conformidad con la Constitución y legislación de Rusia y los tratados internacionales en los que Rusia es parte.

172. La aplicación de dicha Ley implica ajustar la legislación y los instrumentos estatutarios a los nuevos requisitos. En este proceso se experimentan dificultades debido a las pretensiones de varios de los miembros de la Federación a la autorregulación en este campo. Así, el alcalde de Moscú adoptó la Ordenanza n° 637 de 5 de noviembre de 1993 "Introducción de una Orden Especial para la Residencia en la Ciudad de Moscú, Capital de la Federación de Rusia de los Ciudadanos que Residan Permanentemente fuera de Rusia" y los anexos a ella de 5 de noviembre de 1993 (n° 651). El Presidente de la administración de la provincia (oblast) de Amur adoptó el Decreto n° 534 de 30 de noviembre de 1993 "Confirmación de las Reglas para la Entrada y Movimientos y Residencia Temporal en la Provincia (oblast) de Amur". Estos regímenes especiales, adoptados a falta de la aplicación federal de la nueva Ley y de la creciente criminalidad en la capital y en las regiones, serán objeto de examen parlamentario para determinar su conformidad con la ley federal.

173. En el párrafo 2 del artículo 27 de la Constitución se prevé el derecho de todo individuo a abandonar el país.

174. La Ley "Procedimiento para los Ciudadanos de la Federación de Rusia para Viajar Fuera de los Límites de la Federación y Entrar en el Territorio de la Federación" fue objeto de primera lectura en el Consejo Supremo de la Federación de Rusia el 8 de junio de 1993, reestudiado y remitido para una segunda lectura. En espera de la adopción de dicha Ley, la Ley de 20 de mayo de 1991 de la antigua URSS "Procedimiento para los Ciudadanos de la URSS para Salir y Entrar en el País" que reúne las condiciones del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se ha puesto temporalmente en vigor a partir del 1 de enero de 1993. De esta manera, se ha garantizado a nivel legislativo el derecho de todo ciudadano de Rusia de salir libremente de la Federación rusa y regresar a su territorio sin ser molestado.

175. De conformidad con el Decreto del Consejo Supremo de la Federación de Rusia de 22 de diciembre de 1992 y del Decreto del Gobierno n° 73 de 28 de enero de 1993 y también de la Orden n° 157 de 17 de febrero de 1993 del Ministerio del Interior, que aprobó el "Reglamento Temporal para la Preparación y Extensión de Pasaportes a los Ciudadanos de la Federación de Rusia" las oficinas del Ministerio del Interior empezaron en 1 de marzo de 1993 a extender pasaportes para viajar al extranjero a todos los ciudadanos y organizaciones que lo solicitaran, con independencia de la finalidad del viaje y del país al que se dirigieran. Los pasaportes, que no llevan permisos escritos, confieren el derecho de cruzar la frontera estatal de la antigua URSS repetidamente durante los cinco años de su validez. En consecuencia, un derecho humano fundamental - el derecho a salir y entrar libremente del país- ha sido realizado por primera vez en Rusia.

176. Nos encontramos ahora en una situación en que muchas veces es más fácil y rápido para un ciudadano ruso obtener un pasaporte para viajar al extranjero que conseguir los visados de entrada o tránsito para los Estados extranjeros. Los ciudadanos se muestran insatisfechos por las largas colas que hay que hacer en las oficinas consulares de las embajadas extranjeras y por los elevados derechos que deben abonarse para obtener un visado de entrada o tránsito. Con respecto a las dificultades de carácter interior, el elevado precio de los billetes de avión y ferrocarril dificultan los viajes al extranjero.

177. Mientras en 1992 se extendieron 1,5 millones de pasaportes, entre los cuales figuraban 103.700 para la residencia permanente en el extranjero, el número de los extendidos en 1993 alcanzó los 3 millones para viajes temporales y 114.000 para residencia permanente en países extranjeros. El tiempo necesario para obtener un pasaporte se ha reducido notablemente: se tarda ahora un mes para obtener un pasaporte para viajes temporales en el extranjero y hasta tres meses para un permiso de salida para la residencia permanente en el extranjero.

178. Las solicitudes de pasaportes rechazadas ascienden a menos del 1 por ciento. Se trata de casos en que la denegación es temporal cuando se sabe que el solicitante es poseedor de secretos estatales o en virtud de una orden judicial. El Decreto n° 238 de 19 de marzo de 1994 del Consejo de Ministros y del Gobierno de la Federación de Rusia constituyó una comisión interministerial para examinar las apelaciones de los ciudadanos de la Federación de Rusia contra la denegación de concedérseles pasaportes para viajar al extranjero y contra las restricciones temporales de los viajes al extranjero. La Comisión examina las alegaciones de los ciudadanos rusos y adopta decisiones sobre su derecho a abandonar libremente el país de conformidad con los intereses del Estado en materia de la protección de la información que se considera secreto estatal. En

virtud del párrafo 6 del Estatuto de la Comisión aprobado por el Decreto Gubernamental n° 762 de 11 de agosto de 1993, sus decisiones sobre la expedición de un pasaporte para viajar al extranjero a un ciudadano de Rusia deben cumplirse dentro del mes siguiente, a menos que se especifique un período distinto en la propia decisión. El incumplimiento de estos plazos es considerado por la Comisión como una infracción de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos. Durante el período en que la Comisión ha estado en funcionamiento (desde el 1 de enero de 1993) se han celebrado 12 sesiones en las que se examinaron 129 solicitudes que fueron rechazadas y para la gran mayoría de las solicitudes se llegó a la decisión de levantar las restricciones de salida. Para su trabajo la Comisión se inspira en la legislación rusa, incluida la Ley de "Secretos Estatales", la Ley "Seguridad", la Ley "Propiedad en la RSFSR" (artículo 2), y los "Principios de Legislación Civil" (artículo 151).

179. La Comisión ha recibido recientemente muchas solicitudes de personas (los llamados "parientes pobres") que no han cumplido con sus obligaciones de carácter civil y jurídico, especialmente en materia de pensión de alimentos, pero también reclamaciones sobre la propiedad, problemas con los parientes sobre los apartamentos y otros. De acuerdo con la legislación vigente los casos de este tipo deben decidirse exclusivamente en la forma estipulada por la Ley y no caen dentro de la competencia de la Comisión.

180. La Ley de la URSS "Procedimiento para los Ciudadanos de la URSS para Entrar y Salir del País" indica los motivos para imponer restricciones temporales al derecho de abandonar el país (artículo 7). El Capítulo 24-1 del Código de Enjuiciamiento Civil (según la redacción dada por la Ley de la Federación de Rusia de 28 de abril de 1993) define el procedimiento para apelar contra las medidas de los órganos y funcionarios estatales que vulneran el derecho de los ciudadanos a viajar libremente al extranjero y regresar al país sin obstáculos. La legislación vigente (artículo 46 de la Constitución y la Ley de la Federación de Rusia de 27 de abril de 1993 "Recursos Jurídicos Contra las Medidas y Decisiones que Vulneran los Derechos y Libertades Civiles") prevé la apelación directa contra las decisiones de los órganos de que se trate (incluida la Comisión) cuando se nieguen a permitir que los ciudadanos rusos viajen al extranjero. Este tipo de apelaciones son examinadas por los tribunales a los 10 días de su presentación (párrafo 3 del artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Civil). El procedimiento especial que debe seguirse para su examen se rige por el Capítulo 24 del Código de Enjuiciamiento Civil "Apelaciones contra las Medidas de los Organos Estatales, Organizaciones de Funcionarios Públicos que Vulneren los Derechos y Libertades Civiles". No existen por lo tanto obstáculos procesales para examinar los casos de este tipo (o sobre las disputas conexas sobre la propiedad u otros asuntos).

181. El derecho a la entrada a su propio país está garantizado por la Constitución, que dispone el derecho de los ciudadanos a regresar a Rusia sin obstáculos (párrafo 2 del artículo 27). La mencionada Ley de entrada y salida rige las condiciones para el cruce de fronteras (artículo 3). Con respecto a los inmigrantes forzosos, en caso de que no se trate de la llegada de un ciudadano a Rusia o de una llegada masiva de emergencia, la persona que desee ser reconocida como un inmigrante forzoso tendrá el derecho, antes de abandonar el lugar de su residencia permanente, a solicitar el reconocimiento de dicha condición de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 de la Ley "Inmigrantes Forzosos". El Acuerdo sobre la Ayuda a los Refugiados e Inmigrantes Forzosos de 24 de septiembre de 1993, convenido dentro del marco de la CEI, estipula una

serie de medidas para facilitar su entrada en el territorio de las partes. El deseo de facilitar la entrada sin obstáculos de los inmigrantes en Rusia se refleja en los acuerdos concertados con Estonia y Letonia. No se han registrado en Rusia casos de denegación del derecho a entrar en su propio país. A las personas que han sido desposeídas de su ciudadanía o que la perdieron durante el período soviético sin haber contribuido a su pérdida, se les restaurará la ciudadanía soviética de conformidad con la Ley "Ciudadanía de la RSFSR" (enmendada y suplementada el 17 de junio de 1993).

182. En el contexto de la política seguida por Rusia de proteger y ayudar a los ciudadanos de origen ruso que se han encontrado en el extranjero a resultas del colapso de la URSS, se atribuye gran importancia al artículo 62 de la Constitución que prevé que un ciudadano ruso goce de ciudadanía doble. Dicha garantía asegura la posibilidad del regreso del ciudadano a su patria de origen y constituirá un consuelo psicológico para muchas personas que atribuyen importancia a la confirmación de sus vínculos jurídicos con Rusia, sin rechazar al mismo tiempo la ciudadanía del país en el que viven. El reconocimiento de la ciudadanía doble con cada uno de los países exige naturalmente un acuerdo bilateral. Acuerdos de este tipo se han suscrito hasta ahora únicamente con Turkmenistán. Al mismo tiempo, en virtud de la Ley de "Ciudadanía" (subpárrafo 3a del artículo 19) toda persona que tenga un pasaporte de la URSS puede pedir la ciudadanía rusa y, en consecuencia, el derecho a entrar en Rusia sin obstáculos.

183. El 9 de octubre de 1993 se firmó un acuerdo para que ciudadanos de la Comunidad de Estados Independientes puedan viajar dentro del territorio de sus miembros sin necesidad de visado.

184. El objetivo de regular los movimientos transfronterizos de las personas en el ejercicio de su derecho al trabajo está amparado por la legislación rusa en el campo de la inmigración laboral externa y en la actividad práctica para su aplicación. La base de la reglamentación en este campo es la Ley n° 1031-1 de 19 de abril de 1991 "Empleo de la Población de la RSFSR" con las enmiendas de 15 de junio de 1992, Decreto Gubernamental n° 539 de 8 de junio de 1993, Reglamento sobre el Procedimiento para la Concesión de Licencias y las Condiciones de su Concesión con respecto al Empleo de los Ciudadanos Rusos en el Extranjero y Reglamentos sobre la Contratación y Empleo de Trabajadores Extranjeros en la Federación de Rusia, ambos aprobados por el Decreto Presidencial n° 2146 de 16 de diciembre de 1993.

185. El objeto de las actividades del Servicio Federal de Inmigración de Rusia en este campo es proteger el mercado del trabajo nacional, dar prioridad a los ciudadanos rusos para cubrir los puestos vacantes, proteger los derechos de los ciudadanos rusos que trabajen en el extranjero y ayudarles a encontrar empleo ante los empleadores extranjeros dentro del marco de los acuerdos intergubernamentales e interministeriales. A diferencia de las agencias de colocación comerciales, la utilización de estos servicios es gratuita. La investigación realizada a raíz de las alegaciones de que los empleados del Servicio Federal de Inmigración combinan sus obligaciones con la actividad comercial, demostró que no se había vulnerado la ley.

Artículo 13

186. La prohibición de la expulsión, extradición o deportación ilegal de un ciudadano extranjero se desprende de la disposición de la Constitución que confirma que los extranjeros y apátridas tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos de Rusia excepto "en los casos especificados en la ley federal o por un tratado internacional de la Federación de Rusia" (párrafo 3 del artículo 62). La Ley sobre los "Refugiados" estipula directamente "un refugiado no podrá ser devuelto contra su voluntad al país que haya abandonado" entre los motivos para el reconocimiento del estatuto de refugiado (artículo 8 "Garantías de los derechos de los refugiados"). La legislación rusa no prevé la expulsión de un extranjero del país como sanción penal, con excepción de la infracción de la Ley "Los Ciudadanos Extranjeros" y la extradición de criminales de conformidad con acuerdos internacionales.

187. Al mismo tiempo, los círculos de derechos humanos rusos se muestran inquietos por varios casos de deportación de personas sin documentos válidos o sin ningún documento que fueron devueltos a Rusia como país de tránsito por otros Estados o que presentaron solicitudes de asilo que no fueron consideradas ni por las autoridades de los Estados a los que habían sido enviados o en los que se encontraban, ni por los órganos competentes rusos y es preciso adoptar medidas organizativas de conformidad con el Decreto Presidencial n° 2145 de 16 de diciembre de 1993 "Medidas para la Introducción del Control de Inmigración" en el contexto de los requisitos de las normas internacionales, especialmente el artículo 13 del Pacto.

Artículo 14

188. La igualdad ante la ley y los tribunales está consagrada en la Constitución (artículo 19) en el Código de Enjuiciamiento Criminal (artículo 14) y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 9).

189. Las causas son juzgadas invariablemente por los tribunales en audiencia pública. Las vistas a puerta cerrada se permiten únicamente en los casos previstos por la ley y entonces deben observarse todos los derechos procesales. Dichos casos están previstos en el artículo 18 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando la vista en audiencia pública sería perjudicial para los intereses de las partes o la protección de los secretos estatales. Además, el tribunal puede decidir, indicando las razones para ello, juzgar los casos a puerta cerrada cuando se trata de delitos cometidos por personas de menos de 16 años de edad o delitos sexuales, y también en otros casos en que no se quieren revelar detalles íntimos de la vida de las personas implicadas en la causa. Además, la vista de las causas civiles a puerta cerrada se permite con miras a impedir la revelación de detalles íntimos de la vida de la persona afectada y también para asegurar la confidencialidad de la adopción. Sin embargo, la sentencia del tribunal se pronuncia siempre en público.

190. Toda persona acusada de cometer un delito se tendrá por inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, en la forma estipulada por la ley y establecida para la ejecución de la sentencia de un tribunal competente, independiente e imparcial (párrafo 1 del artículo 49 de la Constitución). El acusado no está obligado a demostrar su inocencia (párrafo 2 del artículo 49). Las dudas irreconciliables sobre la culpabilidad de una persona se interpretarán a su favor (párrafo 3 del artículo 49).

191. Cuando una persona sea acusada de un delito el juez de instrucción explicará la naturaleza y motivos de los cargos al acusado de conformidad con los artículos 148 y 149 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR y se le explicarán también sus derechos, en especial el derecho a que se le comuniquen todas las pruebas del caso ya sea independientemente o con la ayuda de un intérprete. Los documentos de la investigación y de la causa se comunicarán al acusado en su lengua materna o en cualquier otro idioma que domine (artículo 17 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR). Los servicios de interpretación se prestarán gratuitamente.

192. En virtud del artículo 48 de la Constitución toda persona tiene garantizado el derecho de verse asistida de un letrado. Dicha asistencia es gratuita en los casos previstos por la ley. En especial, el juez de instrucción, el tribunal, o el fiscal pueden decidir que es esencial la asistencia de un abogado defensor y pueden eximir al acusado del pago total o parcial de sus honorarios. Toda persona acusada que se encuentre en prisión preventiva tiene el derecho a utilizar el servicio de un abogado defensor desde el momento en que haya sido detenida o ingresado en prisión preventiva o que haya sido acusada (párrafo 2 del artículo 48 de la Constitución). El abogado defensor será elegido y contratado por el propio acusado, su representante legal u otras personas que actúen de acuerdo con sus instrucciones o con el acuerdo del acusado (artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR). El abogado defensor tendrá derecho, a partir del momento en que haya sido nombrado para el caso, a celebrar un número ilimitado de entrevistas con el acusado (artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR) y da al acusado el derecho a comunicarse con su abogado tantas veces sea necesario.

193. En la etapa de instrucción del sumario y en el tribunal el acusado tiene derecho a solicitar la comparecencia de cualquier testigo, incluso los que testifiquen contra él y hacerles cualquier pregunta (artículos 46 y 223 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR).

194. Con miras a evitar todo retraso innecesario de la vista, la ley fija los plazos que deben observarse por el juez instructor y el tribunal. En especial, el sumario de los casos criminales debe estar terminado en el plazo de dos meses (artículo 133 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR), la fecha para la vista debe fijarse no más tarde de 14 días una vez recibida la causa por el tribunal si el acusado se encuentra en prisión preventiva, y un mes para los demás casos (artículo 223-1 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR).

195. La ley estipula el carácter especial de los procedimientos que deben seguir los tribunales en los casos de delitos cometidos por menores de edad. La sección 7 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR que regula estos asuntos, contiene reglas referentes a la edad y a la necesidad de corregir y rehabilitar a los menores.

196. Toda persona condenada por un delito tiene derecho a que su caso sea examinado por un tribunal superior en la forma establecida por la ley federal, así como el derecho a solicitar el perdón o la reducción de la sentencia (párrafo 3 del artículo 40 de la Constitución). En virtud del mismo artículo de la Constitución de Rusia, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (párrafo 1 del artículo 50).

197. En el caso de que una persona haya sido condenada infundadamente tendrá derecho a ser compensada por el Estado por los daños o perjuicios que se le hayan causado (artículos 52 y 53).

198. Una parte considerable del trabajo de los tribunales se refiere a los asuntos referentes a la rehabilitación de las víctimas de la represión política. La ley dispone que dichas personas tienen derecho a una indemnización financiera.

199. La Ley sobre la reforma legal propone la elaboración de un proyecto de ley titulado "De las enmiendas y adiciones a la Ley de la Federación de Rusia sobre el Estatuto de los Tribunales en la Federación de Rusia", con miras a ajustarla a la nueva Constitución, después de lo cual los representantes del Congreso Nacional Ruso de Jueces podrán presentar una propuesta legislativa a la Duma del Estado. La principal tarea de la reforma es "acercar los tribunales al pueblo y protegerlo de la influencia de todos los órganos (o funcionarios) de otras ramas de la autoridad estatal y de la administración local". A este respecto existe la intención de constituir distritos de los tribunales federales que abarquen el territorio de dos o más miembros de la Federación, distritos de los miembros de la Federación rusa, divididos a su vez en tribunales de sección en el territorio de las repúblicas, territorios (krais) y provincias (oblasts) y las ciudades con categoría federal. Los límites de los tribunales de distrito y sección no deben coincidir necesariamente con los límites administrativos. Los autores del proyecto estiman que el sistema de tribunales de la jurisdicción general debería revestir la forma siguiente: jueces de paz, que son jueces de primera instancia, que constituyen tribunales unipersonales y entienden de las causas en las secciones de los tribunales. Por encima de ellos estaría la jerarquía constituida por los tribunales de distrito que son los órganos jurídicos de los miembros de la Federación de Rusia. A continuación vendrían los tribunales federales interregionales, cuya principal función sería supervisar la administración de justicia por los tribunales y miembros de la Federación de Rusia y la consideración de los casos de apelación y revisión. Propone también introducir un "tribunal de apelación" como "una estructura jurídica independiente situada entre el tribunal de distrito y el alto tribunal de un miembro de la Federación de Rusia". El órgano jurídico supremo será todavía el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, cuya principal tarea será "asegurar la uniformidad en la aplicación de la legislación vigente por los tribunales".

Artículo 15

200. El contenido del artículo 15 del Pacto está consagrado en el artículo 54 de la Constitución:

"1. Leyes que establezcan o refuercen la responsabilidad no tendrán efecto retroactivo.

"2. Nadie será responsable por un acto que no constituyera delito en el momento de cometerse. Si tras la comisión de un delito se suprime o reduce la responsabilidad penal, se aplicará la nueva ley".

201. En virtud del artículo 6 del Código Penal la responsabilidad y pena prevista por un acto viene determinada por la ley vigente en el momento en que se comete el acto. Si una persona ha cometido un delito por el cual la ley prevé una pena más severa que la existente anteriormente, se aplicará la ley

antigua. Este principio está establecido por el párrafo 3 del artículo 6 del Código Penal de la RSFSR: "La Ley que determine una pena por un acto o que la aumente no tendrá efecto retroactivo". Al mismo tiempo, una Ley que rebaje la pena tiene efecto retroactivo, es decir, se aplicará a un acto cometido antes de ser promulgada (párrafo 2 del artículo 6 del Código Penal de la RSFSR).

202. El principio del carácter preceptivo de la imposición de una pena (párrafo 2 del artículo 15 del Pacto) se refleja en el artículo 4 del Código penal: "Todas las personas que hayan cometido un delito en el territorio de la RSFSR serán castigadas de conformidad con el presente Código".

203. El artículo 9 del Código de Delitos Administrativos estipula que una persona que haya cometido un delito administrativo será responsable de conformidad con la legislación vigente en el momento y en el lugar en que se haya cometido el delito. Las leyes que rebajen o supriman la responsabilidad por los delitos administrativos tendrán efecto retroactivo, mientras que las que determinan o aumentan la responsabilidad no tendrán carácter retroactivo.

Artículo 16

204. El reconocimiento de toda persona en el territorio de Rusia como sujeto de derecho es un importante elemento de las garantías de los derechos y libertades humanos (capítulo 2 de la Constitución), a cuyo respecto, se tendrán en cuenta las características específicas de la regulación de los derechos y obligaciones de las distintas categorías de pueblos (miembros de las fuerzas armadas, migrantes, extranjeros, etc.) de conformidad con la legislación rusa.

Artículo 17

205. La protección contra la injerencia ilegal o arbitraria en la vida privada y familiar, la perturbación arbitraria o ilegal del hogar o del secreto de la correspondencia y de la dignidad y reputación personales está garantizada en los siguientes artículos de la Constitución:

(a) Artículo 21, párrafo 1: "La dignidad del individuo está protegida por el Estado. No podrá invocarse motivo alguno en su menoscabo."

(b) Artículo 23:

"1 Toda persona tendrá el derecho a la inviolabilidad de su vida privada, a la intimidad personal y familiar y a la protección de su honor y fama.

"2. Toda persona tiene derecho al secreto de la correspondencia, conversaciones telefónicas y comunicaciones postales, telegráficas y de otra índole. La restricción de este derecho se permitirá únicamente mediante decisión judicial."

(c) Artículo 24, párrafo 1: "La recopilación, almacenamiento y uso de la información sobre la vida privada de un individuo sin su permiso no está permitida".

(d) Artículo 25: "El hogar de una persona será inviolable. Nadie tendrá derecho a entrar en un hogar contra la voluntad de las

personas que residan en él excepto en los casos previstos por la ley federal o de acuerdo con una decisión judicial."

206. El derecho de toda persona a la protección de la ley contra dicha injerencia viene confirmado también por la Constitución:

(a) Artículo 45:

- "1. La protección de los derechos y libertades civiles y humanos en la Federación de Rusia estará garantizada por el Estado.
- "2. Toda persona tendrá derecho a defender sus derechos y libertades por todos los medios que no estén prohibidos por la ley".

(b) Artículo 46

- "1 Toda persona tendrá garantizada la protección jurídica de sus derechos y libertades.
- "2 Las decisiones y medidas (u omisiones) de las autoridades gubernamentales, administraciones locales, asociaciones públicas y funcionarios del Estado pueden ser impugnadas ante los tribunales".

207. El artículo 12 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la RSFSR dispone que "La vida personal de los ciudadanos, y el secreto de la correspondencia, conversaciones telefónicas y comunicaciones telegráficas estarán protegidas por la ley", y que "nadie tendrá derecho sin motivos jurídicos a entrar en el hogar de una persona sin el asentimiento de los que residan en él".

208. El derecho constitucional de los ciudadanos de Rusia a la protección de su honor y dignidad está garantizado en la legislación civil. De conformidad con el artículo 7 del Código Civil todo ciudadano tiene derecho a recurrir a los tribunales para rechazar toda información injuriosa o calumniosa que constituya una afrenta a su honor y dignidad. En especial, cuando dicha información haya sido divulgada a través de los órganos de comunicación social, deberá ser refutada en dichos órganos en la manera indicada por la ley. Además, los órganos de comunicación, funcionarios o ciudadanos culpables de divulgar informaciones calumniosas o injuriosas que constituyen una afrenta al honor y dignidad de la persona, pueden ser obligados por orden del tribunal a pagar daños y perjuicios por los daños morales y otros de carácter inmaterial causados al ciudadano, cuya cuantía será determinada por el juez.

209. Existe el proyecto de conseguir una protección especial para los individuos y categorías de ciudadanos cuyas actividades oficiales puedan hacerles sujeto de ataques. Así, se está terminando la redacción de una ley que se titulará "La Protección estatal a los jueces, miembros de las fuerzas del orden e inspecciones, víctimas y testigos".

210. La Ley de 27 de diciembre de 1991 "Los Medios de Comunicación Social" contiene disposiciones para proteger el honor y dignidad de los ciudadanos en caso que los medios de comunicación divulguen informaciones injuriosas o calumniosas que perjudiquen sus derechos e intereses legales (artículo 43, 44,

46). También se dispone la indemnización por los daños morales causados al ciudadano a resultas de la divulgación por los medios de comunicación de información injuriosa o calumniosa que constituyen una afrenta a su honor y dignidad (artículo 62).

211. El artículo 5 de la Ley de la Federación de Rusia de 2 de julio de 1992 "Los Cuidados Psiquiátricos y Garantías de los Derechos Civiles en su Prestación" propone una actitud respetuosa y humana y excluye la conducta humillante en aquella prestación y prohíbe restringir los derechos y libertades de los pacientes de enfermedades mentales.

212. Las garantías constitucionales de esta libertad deberán inscribirse en la legislación sectorial, lo que deberá hacerse a resultas de la labor del nuevo parlamento.

Artículo 18

213. La libertad de pensamiento, conciencia y religión, que tiene especial importancia en un país como Rusia, en el que coexisten tradicionalmente muchas religiones, está garantizada en los artículos siguientes de la Constitución:

- (a) Artículo 28: "Toda persona tendrá garantizada la libertad de conciencia y religión, incluido el derecho a profesar toda religión individual o colectivamente o a no profesar ninguna religión, elegir, mantener y propagar libremente creencias religiosas o de otra índole y de actuar de conformidad con ellas".
- (b) Artículo 29, párrafo 1: "Toda persona tendrá garantizada la libertad de pensamiento y palabra".

214. Mientras la declaración de libertad de conciencia y religión sirvió hasta fines de los años 1980 como un justificante de la política del ateísmo del Estado, las autoridades reconocen ahora el importante papel de la religión en el resurgimiento de la espiritualidad y prestan ayuda y apoyo a las distintas organizaciones y asociaciones religiosas de Rusia. Así, en cumplimiento de la Orden Presidencial de 27 de abril de 1993, el Gobierno de Rusia adoptó el Decreto n° 466 de 16 de mayo de 1994 por el que se aprueban las medidas provisionales para la transferencia de los bienes de carácter religioso que eran propiedad del Estado federal a las asociaciones religiosas. En virtud de este Decreto se han transferido más de 300 edificios y estructuras religiosas a diversas asociaciones religiosas.

215. El artículo 14 de la Constitución es muy importante; el párrafo 1 manifiesta que no podrá declararse ninguna religión como oficial u obligatoria. El párrafo 2 del mismo artículo proclama que las asociaciones religiosas serán independientes del Estado e iguales ante la ley. La expresión de este derecho se desarrolla en los párrafos 1 y 2 del artículo 18 del Pacto.

216. La Ley "Libertad de Religión" de 25 de octubre de 1990 se adoptó de conformidad con el artículo 18 del Pacto. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión viene confirmado en los artículos 3 a 6 del artículo 22 de dicha Ley. El recurso a medidas coactivas con relación al ejercicio de este derecho está prohibido en los artículos 6 y 16 de la Ley. La violación de la libertad de conciencia y religión está castigada en el Código

Penal (artículo 143), mientras que la obstaculización del ejercicio del derecho a dicha libertad constituye un delito en virtud del Código de Delitos Administrativos (artículo 193) cuando dichas acciones no contengan elementos de delito. Los convictos tendrán derecho a profesar cualquiera religión o ninguna. Serán autorizados a asistir a lugares de culto o bien se invitará a individuos del clero a celebrar servicios religiosos en las cárceles. En las colonias penales se están abriendo iglesias, mezquitas y casas de reunión. Las restricciones del ejercicio de esta libertad se indican en el párrafo 2 del artículo 4, que estipula que el ejercicio de los derechos humanos y civiles no debe interferir con los derechos y libertades de otros individuos.

217. La Ley " Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas" (artículo 8) dispone que:

- "1. Los miembros de las fuerzas armadas tendrán derecho a participar, en su tiempo libre, en ceremonias religiosas como particulares.
- "2. Los miembros de las fuerzas armadas no tendrán el derecho a negarse a desempeñar sus obligaciones militares alegando su actitud ante la religión o a utilizar su autoridad militar para diseminar determinadas actitudes ante la religión.
- "3. Los símbolos religiosos, la literatura religiosa y objetos de culto serán utilizados por los miembros de las fuerzas armadas con carácter individual.
- "4. El Estado no tiene la obligación de satisfacer las exigencias de los miembros de las fuerzas armadas con respecto a sus creencias religiosas y la necesidad de asistir a ceremonias religiosas.
- "5. La constitución de asociaciones religiosas en las unidades militares no está permitida."

218. El párrafo 2 del artículo 29 de la Constitución prohíbe la labor de proselitismo. Además, el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley "Libertad de religión" estipula que la incitación a la hostilidad y odio basada en las creencias religiosas o ateistas de los ciudadanos va en contra de la ley. Dichos actos premeditados son perseguibles en virtud del Código Penal (artículo 74, véase también el texto en relación con el artículo 20 del Pacto). La exigencia de que el Estado debe respetar la libertad de los padres o guardianes legales con respecto a la educación religiosa y moral del niño de conformidad con la fe de su elección está garantizada en el párrafo 5 del artículo 9 de esta Ley. Con arreglo al artículo 10 de la Ley, que corresponde al párrafo 2 del artículo 8 del Pacto, todas las religiones y asociaciones religiosas son iguales ante las leyes del Estado. Ninguna religión o asociación religiosa gozará de ventajas sobre las demás ni podrá estar sometida a restricciones con relación a aquéllas.

219. El Estado es neutral en materia de libertad de religión y creencias, es decir, no apoya ninguna religión o actitud. Este principio está confirmado en el Reglamento de la Función Pública Federal aprobado por el Decreto Presidencial nº 2267 de 22 de diciembre, cláusula 10, el cual en especial prohíbe a un funcionario público servirse de su función oficial "para propagar una actitud

hacia la religión y asistir a ceremonias religiosas en su calidad de funcionario público".

220. La posibilidad de negarse a cumplir el servicio militar por objeción de conciencia está reconocida en Rusia como expresión legal del derecho a la libertad de conciencia y religión según indica la resolución 1987/46, de fecha 10 de marzo de 1987, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se reconoce también que es necesario adoptar legislación a este respecto y adoptar medidas para la baja en el ejército basada en dicha negativa por motivos de conciencia, según dispone la resolución de la Comisión 1989/59. La Constitución (párrafo 3 del artículo 59) garantiza este derecho a la negativa "en casos en que el cumplimiento del servicio militar esté en contra de las creencias o religión del ciudadano y también en los demás casos previstos por la ley federal, el ciudadano tendrá derecho a sustituir el servicio militar por otro tipo de servicio."

221. En 1993, un proyecto de ley sobre el servicio alternativo fue objeto de primera lectura en el parlamento ruso; dicho proyecto prevé, en especial, la organización del servicio alternativo, el procedimiento para su cumplimiento, y la aprobación por el Gobierno de reglamentos sobre realización del servicio alternativo. Hay la intención de que dicha ley sea adoptada en 1994.

222. Con respecto a la confirmación de la libertad de pensamiento, el artículo 18 del Pacto coincide con el artículo 13 (párrafos 1 y 2) del artículo 29 de la Constitución. Así, el párrafo 1 del artículo 13 determina que: "En la Federación de Rusia está reconocida la diversidad ideológica". Atendiendo a la negativa experiencia histórica del país, el párrafo 2 del mismo artículo proclama: "Ninguna ideología podrá proclamarse como ideología del Estado o como ideología obligatoria".

Artículo 19

223. La libertad de pensamiento está proclamada en el artículo 18 del Pacto y definida en mayor detalle en el artículo 19 y está garantizada por el artículo 29 de la Constitución de Rusia: "Toda persona tendrá garantizada la libertad de pensamiento"; "Toda persona tendrá el derecho a elegir libremente, recibir, transmitir, reproducir y diseminar información en toda forma legítima." El párrafo 3 del artículo 29 de la Constitución expresa concretamente el párrafo 1 del artículo 18 del Pacto, que afirma, teniendo en cuenta la evolución histórica de nuestra sociedad: "Nadie podrá ser forzado a expresar su opinión o creencias o renunciar a ellas." El párrafo 2 del artículo 19 del Pacto queda también expresado concretamente en el párrafo 5 del artículo 29 de la Constitución que estipula: "La libertad de los medios de comunicación estará garantizada. Está prohibida la censura." El párrafo 3 del artículo 19 del Pacto se refleja en el artículo 29 de la Constitución con algunas diferencias de redacción. Las restricciones al uso de la libertad de palabra se formulan de la forma siguiente: "No se permitirá la propaganda o agitación que incite al odio u hostilidad social, racial, nacional o religiosa. También está prohibida la propaganda sobre la supremacía social, racial, nacional, religiosa o lingüística" Queda así protegido el orden público, la moral y salud públicas. El artículo 29 da efectividad al párrafo 3 del artículo 17 de la Constitución y al párrafo 3(a) del artículo 19 del Pacto, donde se indica: "El ejercicio de los derechos y libertades humanos y civiles no debe perjudicar los derechos y libertades de otras personas".

224. El artículo del Pacto examinado se refleja en la Ley de la Federación de Rusia titulada "Los Medios de Comunicación Social", cuyos artículos 1 a 6 corresponden al contenido del artículo 19 del Pacto. El Decreto de 10 de junio de 1994 sobre la "Protección del Consumidor" pretende promover el derecho humano a una información económica fidedigna.

225. La Ley "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas" (artículo 7) regula el ejercicio de los miembros de las fuerzas armadas de su derecho a la libertad de palabra, y al derecho a expresar sus opiniones y creencias, pero con sujeción a la obligación de no revelar secretos estatales o militares y no contradecir o criticar las órdenes de sus jefes.

226. Las disposiciones de la Ley "Secretos Estatales" se aplican a los ciudadanos que han aceptado la obligación o que por su cargo están obligados a respetar a los términos de la legislación sobre los secretos de Estado. La Ley trata al individuo no como depositario de la información que constituye un secreto de estatal sino como sujeto de una relación contractual con el Estado.

227. Los derechos e intereses jurídicos del individuo referentes a la expresión de su opinión y su divulgación están protegidos por la ley, incluida la protección de la propiedad intelectual en los aspectos de derechos de autor y derechos de patente, y la institución del secreto comercial.

228. En 1993 se adoptaron en la Federación de Rusia una serie de medidas para garantizar libertad de los medios de comunicación y la realización de los derechos constitucionales de los ciudadanos a obtener una información fidedigna. Con el objeto de prevenir el monopolio de los medios de comunicación y la interferencia ilegal en sus actividades, y en relación con la auténtica amenaza a la libertad de los medios de comunicación garantizada en Rusia, el Decreto Presidencial n° 376 de 20 de marzo de 1993 "Protección de la Libertad de los Medios de Comunicación Social" garantizó la protección de la ley y del Presidente a los medios de comunicación y de diseminación, y definió también las medidas necesarias para su aplicación.

229. En la Federación de Rusia existen distintas fuentes para la publicación oficial de las leyes federales y demás legislación de las autoridades federales, entre las que figuran:

(a) Todas las Leyes federales deben publicarse en el llamado "Repertorio Legislativo de la Federación de Rusia" de conformidad con el Decreto Presidencial de 5 de abril de 1994 (anteriormente aparecían en el "Boletín Oficial del Congreso de Diputados del Pueblo de la Federación de Rusia y el Soviet Supremo de la Federación de Rusia", mientras que los Decretos Presidenciales y Decretos del Gobierno de la Federación de Rusia figuraban en el "Repertorio de Leyes en Vigor del Presidente de la Federación de Rusia y del Gobierno de la Federación de Rusia" y también en el "Diario Oficial de Rusia";

(b) Se ha establecido por primera vez un sistema eficaz en la Federación de Rusia para la publicación de las leyes promulgadas por los ministerios federales y departamentos que suplementan los derechos y deberes de los ciudadanos y los de las empresas, organizaciones y oficinas que forman parte de un ministerio o departamento. Todas estas leyes deben registrarse oficialmente ante el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia y deben publicarse en las "Noticias de Rusia". Las órdenes cursadas por los ministerios y

departamentos federales que regulan los derechos y deberes de los ciudadanos y otros individuos no entran en vigor y no deben utilizarse y aplicarse hasta que no hayan sido publicados en el documento correspondiente;

(c) Para que los órganos estatales y los ciudadanos estén informados sobre los instrumentos vigentes en la Federación de Rusia, los decretos presidenciales (nº 447 de 23.04.93; nº 663 de 12.05.93; y nº 966 de 29.06.93) dictan medidas para la creación de un banco de datos de información jurídica, incluidos los instrumentos vigentes de los órganos supremos legislativos y ejecutivos de la Federación de Rusia, y los instrumentos estatutarios de todos los miembros de la Federación.

230. En ampliación de la Constitución, el Decreto Presidencial nº 2334 de 31 de diciembre de 1993 "Garantías Adicionales de los Derechos de los Ciudadanos a la Información" ordena la preparación de un proyecto de ley de la Federación de Rusia sobre el derecho a la información. El Decreto establecerá que las actividades de los órganos, organizaciones y empresas estatales, asociaciones públicas de los funcionarios públicos se llevarán a cabo de conformidad con los principios para la transparencia de información, cuya expresión es que la información de interés público o que afecta a los intereses personales de los ciudadanos será asequible a éstos y también que los ciudadanos estarán informados sistemáticamente de las decisiones que se propongan o se hayan adoptado.

231. Un decreto que desarrolla la ley "Los Medios de Comunicación Social" establece la obligación de la televisión y emisoras de radio estatales de informar acerca de las principales disposiciones de las leyes y decisiones de los órganos estatales sobre los principales temas de política interior y extranjeras en el día de su publicación. En junio de 1994 el Comité sobre Política de Información y Comunicaciones de la Duma del Estado preparó un proyecto de Ley Federal sobre el apoyo del Estado a los medios de comunicación de la Federación de Rusia.

232. El Decreto nº 2335 del Presidente de la Federación de Rusia "Tribunal de Apelación del Presidente de la Federación de Rusia para los conflictos en materia de información" de fecha 31 de diciembre de 1993, está encaminado también a asegurar los derechos de los ciudadanos a la información garantizada por la Constitución de la Federación de Rusia y el respeto a los intereses legales en este campo.

233. El Decreto Presidencial nº 228 "Aprobación de los Estatutos del Tribunal de Apelación del Presidente de la Federación de Rusia para los conflictos en materia de información" de fecha 31 de enero de 1994 define las tareas del Tribunal de Apelación, entre las que figuran ayudar al Presidente de la Federación de Rusia a proteger los derechos y libertades en materia de medios de comunicación, asegurando la objetividad y fiabilidad de las noticias, y el principio de igualdad de derechos en materia de medios de comunicación, etc.

234. En marzo de 1994 el Tribunal de Apelación examinó algunos casos de infracción de las disposiciones de la Constitución de la Federación de Rusia sobre la igualdad de derechos para las mujeres en diversos órganos de los medios de comunicación (véase también el texto referente al artículo 20 del Pacto).

235. El objetivo de regular la actividad de los medios de comunicación se consigue mediante un conjunto de Decretos Presidenciales de 22 de diciembre de 1993, entre los que figura "Mejora del Control Estatal en Materia de Medios de Comunicación" (nº 2255). Está casi terminado el trabajo de preparación de una Ley sobre el procedimiento para informar acerca de la actividad de los órganos oficiales en los medios de comunicación estatales.

Artículo 20

236. La propaganda en favor de la guerra, consistente en la difusión de opiniones e ideas encaminadas a desencadenar la guerra entre los Estados, está prohibida en Rusia y castigada de conformidad con el artículo 71 del Código Penal. La prohibición de fomentar el odio nacional, racial o religioso como incitación a la discriminación, hostilidad y violencia se desprende del párrafo 2 del artículo 29 de la Constitución. Las garantías complementarias a este respecto se desprenden de la obligación de los Estados de proteger los derechos y libertades humanos y civiles (artículo 2 y párrafo 1 del artículo 45), y de asegurar la igualdad entre los individuos y prohibir toda restricción de sus derechos por motivos de raza, nacionalidad, idioma o religión (párrafo 2 del artículo 19). El Código Penal establece la responsabilidad por fomentar la hostilidad racial o nacional y la discordia (artículo 74).

237. La difusión en el territorio postsoviético y especialmente en Rusia de la xenofobia, extremismo, ideas de intolerancia, superioridad étnica, el culto de la exclusividad racial y religiosa, la "idea nacional" los esloganes nacionalistas, y de demandas para el establecimiento de un régimen nacional y autoritario en el país, y la realización de una política imperial basada en la represión de los disidentes y no rusos, constituye causa de preocupación para las autoridades rusas y para una sociedad cuya transformación democrática puede ponerse en peligro.

238. El uso de estas ideas y esloganes en el transcurso de los acontecimientos de Moscú los días 3 y 4 de octubre de 1993 para justificar el paso de las palabras a los actos de violencia que entrañan víctimas humanas, fue objeto de una decidida oposición por parte de las autoridades rusas, las cuales suspendieron las actividades de varias asociaciones públicas (Reglamento del Ministerio de Justicia nº 131/16-47 y nº 133/16-47 de 4 y 6 de octubre de 1993). En virtud del Decreto Presidencial nº 1661 de 19 de octubre de 1993 varias asociaciones públicas y partidos que propugnaban ideas de hostilidad nacional y discordia y se habían embarcado en actividades encaminadas a desestabilizar el Estado y monopolizar el poder, fueron desposeídas de su derecho de inscripción para participar en las elecciones al parlamento y a los órganos representativos de los miembros de la Federación de Rusia de 12 de diciembre de 1993.

239. Desde 1991 los tribunales han juzgado 10 causas criminales incoados en virtud del artículo 74 del Código Penal. En dichos casos recayeron cinco veredictos de culpabilidad. Prosiguen 14 causas en virtud del mismo artículo. Se juzgaron varios casos por la propagación de ideas antisemitas. A este respecto, la Fiscalía General examinó 24 asuntos sobre los que decidió no procesar, un caso se suspendió por motivos jurídicos y tres van a ser juzgados.

240. Varios casos de publicación de materiales que pueden interpretarse en el sentido de fomentar las discordias interétnicas fueron juzgados por el Tribunal de Apelación del Presidente de la Federación de Rusia.

241. La lucha contra el regreso al pasado, presente todavía en la conciencia de algunos ciudadanos, exige esfuerzos para superar la amenaza de la difusión del nacionalismo agresivo y la xenofobia, las ideas facistas, el odio a los judíos y la intolerancia hacia las minorías étnicas (véase a este respecto los artículos 1, 4 y 27 del Pacto). A este respecto las autoridades rusas están adoptando la actitud de erradicar los principios de intolerancia, y aumentar el sentido de justicia en la sociedad en conjunción con el reforzamiento de las garantías de libertad de palabra, manifestación y organizaciones públicas.

242. Las iniciativas en el campo de reforzar las garantías internacionales contra el nacionalismo agresivo ocupan un importante lugar en la política exterior rusa. Por iniciativa de Rusia se adoptó una Declaración sobre el Nacionalismo Agresivo en la Reunión de Roma del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los países de la CSCE en diciembre de 1993. La Declaración Conjunta Sovietoamericana sobre Derechos Humanos adoptada por los Presidentes de Rusia y los Estados Unidos de América en enero de 1994 hace referencia a la amenaza a la paz y la democracia del nacionalismo agresivo, antisemitismo y extremismo político (véase también el texto relativo al artículo 27). La adopción por la Duma del Estado el 23 de febrero de 1994 del Decreto "Amnistía para Determinados Delitos Cometidos en el Campo de la Actividad Política y Económica" (incluida la concesión de una amnistía a los que podían haber sido procesados por los acontecimientos del 19-21 de agosto de 1991 y 1 de mayo de 1993, y con relación a la oposición del 21 de septiembre-4 de octubre a los Decretos Presidenciales) se considera en Rusia como un paso hacia la reconciliación nacional y la paz civil en el país y una confirmación de los principios civilizados de tolerancia en las difíciles circunstancias del desarrollo de la situación política interna de Rusia.

Artículo 21

243. El derecho de reunión pacífica se refleja en el artículo 31 de la Constitución: "Los ciudadanos de la Federación de Rusia tendrán el derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, celebrar reuniones, manifestaciones y procesiones y a organizar piquetes de huelga".

244. En la actualidad se aplica el Decreto del Presidium del Soviet Supremo de 28 de julio de 1988 "Procedimiento para la Organización y Celebración de Reuniones, Procesiones Callejeras y Manifestaciones en la URSS" la aplicación, hasta tanto no se haya adoptado la Ley en la materia, fue confirmada por el Decreto Presidencial de 25 de mayo de 1992 "Procedimiento para la Organización y Celebración de Reuniones, Procesiones, Manifestaciones y Organización de Piquetes de Huelga". Actualmente se está redactando una Ley federal en la materia.

245. Con referencia a la ciudad de Moscú, el Decreto Presidencial de 24 de mayo de 1993 aprobó el "Reglamento Provisional sobre el Procedimiento para Notificar a las Autoridades Ejecutivas de la Ciudad de Moscú la Celebración de Reuniones, Procesiones, Manifestaciones y Piquetes de Huelga en las Calles, Plazas y Otros Lugares Públicos de la Ciudad". Para algunas plazas y calles céntricas de Moscú se han introducido restricciones en la celebración de manifestaciones. De conformidad con este reglamento, no se autoriza la manifestación en algunos casos, como cuando se trata de la contravención de las normas de la moral pública y la falta de precauciones para asegurar el orden público.

246. La Ley "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas" (artículo 7) dispone que:

- "1. Los miembros de las fuerzas armadas, al ejercer de su derecho a la libertad de palabra, a expresar sus opiniones y creencias y su acceso a la obtención y difusión de información, no deben revelar secretos estatales y militares y no deben contradecir ni criticar las órdenes de sus jefes.
- "2 Los miembros de las fuerzas armadas tienen el derecho, cuando estén fuera de servicio, de asistir a reuniones, procesiones, manifestaciones y piquetes de huelga que no persigan fines políticos y no estén prohibidos por las autoridades estatales o la administración de las autoridades locales.

La participación de los miembros de las fuerzas armadas cuando estén de servicio en reuniones públicas se rige por el reglamento militar general de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

- "3. Está prohibida la participación de los miembros de las fuerzas armadas en huelgas.

Artículo 22

247. El artículo 30 de la Constitución dispone el derecho a la libertad de asociación:

- "1. Toda persona tendrá derecho a asociarse con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos para proteger sus intereses. La libertad para la actividad de las asociaciones públicas estará garantizada.
- "2. Nadie estará obligado a afiliarse a una asociación del tipo que sea o a permanecer en ella."

248. De conformidad con el artículo 9 de la Ley "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas" los miembros de las fuerzas armadas pueden pertenecer a asociaciones públicas que no tengan fines políticos y pueden tomar parte en sus actividades cuando estén fuera de servicio.

249. De conformidad con el Decreto nº 2057-1 del Soviet Supremo de la RSFSR de fecha 18 de diciembre de 1991, "Inscripción de las Asociaciones Públicas en la RSFSR y los Derechos de Inscripción", la legislación de la URSS sobre asociaciones públicas (incluidos los partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones) es aplicable en Rusia siempre que no se oponga a su propia legislación y a las reglas generalmente reconocidas del derecho internacional. En consecuencia, la Ley de la URSS "Asociaciones Públicas" de 9 de octubre de 1990 seguirá en vigor, exceptuados los cambios hechos por el decreto mencionado que rigen la inscripción en el registro de estas asociaciones.

250. El derecho de los miembros de la milicia a afiliarse a un sindicato se prevé en la Ley de 1991 sobre la milicia y en el Reglamento sobre el Servicio en las Unidades del Ministerio del Interior ruso.

251. Los intentos para suprimir las actividades de varias asociaciones públicas de la oposición, cuyos miembros habían tomado parte en disturbios públicos, no dieron lugar a su disolución ya que con arreglo a la actual Ley de 9 de diciembre de 1990, sus actividades pueden terminarse únicamente por su reorganización o disolución decidida por sus propios fundadores o por un tribunal cuando dicha asociación haya llevado a cabo actos con el fin o como medio de derrocar o cambiar el orden constitucional por la fuerza o atentar contra la unidad del país por la fuerza o hace propaganda en pro de la guerra, violencia o brutalidad, o atizar la discordia social, racial, nacional o religiosa, o llevar a cabo otros actos criminales y también cuando instituyen grupos militarizados o armados (párrafo 3 del artículo 3 y artículo 14 de la Ley).

252. El Duma del Estado tiene actualmente en estudio un proyecto de Ley sobre los derechos civiles de la asociación, en el cual se tienen en cuenta las normas internacionales correspondientes.

Artículo 23

253. Las obligaciones del Estado con respecto a la protección de la familia figuran en el artículo 38 de la Constitución, que estipula:

- "1. La maternidad y la infancia así como la familia están protegidos por el Estado.
- "2. El cuidado y educación de los hijos constituyen un derecho y un deber de los padres por partes iguales.
- "3. Los hijos en plenas facultades físicas que hayan alcanzado los 18 años de edad se ocuparán de los padres que no puedan trabajar."

254. De conformidad con el artículo 39 de la Constitución "Todo el mundo tendrá garantizada la seguridad social en la vejez, en caso de enfermedad, incapacidad o pérdida del que mantenga la familia, para la educación de los hijos y en los demás casos estipulados por la ley."

255. El Decreto Presidencial n° 1908 de 19 de noviembre de 1993 "Comisión para los Asuntos Referentes a las Mujeres, la Familia y la Demografía" establece un órgano asesor en la Oficina del Presidente de la Federación de Rusia, y en la citada Comisión, para la formulación y coordinación de la política pública encaminada a alcanzar derechos y oportunidades iguales entre hombres y mujeres, y mejorar la condición social de la mujer, apoyar la familia y solucionar los problemas demográficos. La Comisión, cuya composición ha sido ya aprobada, ha sido establecida de acuerdo con la Comisión Presidencial para los Asuntos Referentes a las Mujeres, la Familia y los Hijos, establecida de acuerdo con el Decreto Presidencial n° 337 de 4 de marzo de 1993 "Medidas Acuciantes de Política Pública Referente a las Mujeres".

256. Los "Principios de la Legislación de la Federación de Rusia sobre la Protección de la Salud de los Ciudadanos" de fecha 22 de julio de 1993, estipula que "Todo ciudadano tendrá derecho, por motivos médicos, al libre asesoramiento sobre asuntos de planificación familiar, enfermedades venéreas y enfermedades que constituyen una amenaza para otros, sobre los aspectos médicos y genéticos de las relaciones familiares y sexuales y también asesoramiento médico genérico

y de otra índole y al reconocimiento médico en los establecimientos del Estado del sistema de salud municipal, con el objeto de prevenir posibles enfermedades hereditarias de la descendencia". Estos principios contienen también una sección especial titulada "Actividad médica referente a la planificación familiar y la regulación de la función reproductora humana" que incluye asuntos sobre la inseminación artificial (implante de embriones), la interrupción artificial del embarazo, y la esterilización médica voluntaria.

257. El Decreto Gubernamental n° 913 de 28 de noviembre de 1992 "El Departamento para los Problemas de la Familia, Mujeres y Niños del Ministerio de Seguridad Social de la Federación de Rusia" establece el departamento como órgano federal encargado principalmente de llevar a cabo la política en materia de asuntos familiares.

258. Los órganos ejecutivos de los miembros de la Federación de Rusia están creando órganos estatales similares (comités y departamentos). También se ha creado un Instituto para la Investigación Familiar, dependiente del Ministerio de Bienestar Social de la Federación de Rusia (Decreto Gubernamental n° 646 de 12 de julio de 1992).

259. El Decreto Presidencial n° 431 de 5 de mayo de 1992 "Medidas de Asistencia Social para las Familias Numerosas" ofrece prestaciones a las familias numerosas. Las distintas categorías de familias afectadas son definidas por los órganos ejecutivos de los miembros de la Federación de Rusia. En Moscú y en la mayor parte de las regiones del país la definición aceptada es la familia que tiene tres o más hijos. Dichos beneficios proveen un precio reducido para la calefacción, consumo de agua y otros servicios públicos, transporte gratuito a la escuela, comidas escolares gratuitas, uniformes gratuitos y equipo de deportes, prioridad de admisión en los establecimientos preescolares, etc.

260. Por el Decreto n° 2464-1 (6 de marzo de 1992) del Consejo Supremo de la Federación de Rusia "Modalidades de Pago para los Niños que Asisten a los Establecimientos Preescolares y Apoyo Financiero al Sistema de estos Establecimientos", el pago por los niños que asisten a los establecimientos preescolares se fija en no más del 20 por ciento del costo de mantener a un niño en el establecimiento y para los padres que tienen tres o más hijos no más del 10 por ciento de dicho costo. Los padres de hijos disminuidos física o mentalmente están exentos del pago de su manutención, así como los hijos que se encuentran en establecimientos preescolares que sufren de tuberculosis. Existen beneficios análogos para las regiones de la Federación de Rusia.

Artículo 24

261. El derecho del niño a ser protegido por su familia, la sociedad y el Estado, basado en las garantías constitucionales y de otro orden indicadas anteriormente, viene apoyado por medidas complementarias.

262. En cumplimiento del Decreto Presidencial n° 543 "Medidas Urgentes para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño en los años 1990" se adoptó un Decreto Gubernamental que confirma una lista de medidas para mejorar la situación de los niños en la Federación de Rusia, y comprende mejores cuidados para los recién nacidos, la organización de la producción de equipos médicos para el tratamiento de niños y para uso obstétrico, la compra de alimentos dietéticos para los niños y también

equipos esenciales importados y suministros para mantener la producción nacional de inoculación en masa de la población, la libre distribución de productos lácteos especiales para todos los niños en el primero y segundo año de su vida, y otras medidas (Decreto Gubernamental n° 610 de 21 de agosto de 1992 "Medidas Urgentes para Mejorar la Situación de los Niños en la Federación de Rusia").

263. Un programa federal titulado "Los Niños de Rusia", preparado y aprobado por el Gobierno, incluye los programas siguientes: "Niños Huérfanos", "Niños Inválidos", "Niños del Norte", "Planificación Familiar", "Niños de Chernobyl" y "Desarrollo de la Industria Alimentaria Infantil" (Decreto Gubernamental n° 909 de 9 de septiembre de 1993 "El Programa Federal 'Los Niños de Rusia'"). El Decreto Gubernamental n° 69 de 31 de enero de 1994 aprobó el reglamento para la redacción de un plan de acción nacional dedicado a los niños de Rusia hasta el año 2000.

264. En la aplicación del Decreto Gubernamental n° 8848 de 23 de agosto de 1993 los ministerios y departamentos correspondientes deben redactar un informe estatal anual sobre la situación de los niños en la Federación de Rusia. Antes de 1993 estos informes eran redactados por la organización no gubernamental "La Fundación de los Niños". El primero de dichos informes "La Situación de los Niños en Rusia" fue presentado en 1990.

265. El Decreto Gubernamental n° 409 de 20 de junio de 1992 "Medidas Urgentes de Protección Social para Huérfanos y Niños Abandonados" aumentó la protección y los beneficios para los cuidadores de niños en los hogares infantiles estatales y amplió estas normas y beneficios a los huérfanos y niños abandonados adoptados por familias, concediendo un pago mensual equivalente al concedido a los padres adoptivos (guardianes) de dichos niños.

266. El Gobierno constituyó una Comisión para coordinar las operaciones relacionadas con la aplicación en la Federación de Rusia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo de los Niños (Decreto Gubernamental n° 77 de 23 de octubre de 1993).

267. El Decreto Presidencial n° 1338 de 6 de septiembre de 1993 "Prevención de la Vagancia y Delincuencia Juveniles, y Protección de los Derechos de los Juveniles" instituyó un sistema de órganos estatales para conseguir una solución general a los problemas de impedir la vagancia y delincuencia juvenil, y ofrecer protección para los derechos e intereses legales de los menores. Se decidió crear establecimientos (servicios) especiales en 1993-94 para los menores que necesiten la readaptación social y también establecimientos educacionales especiales de tipo abierto para los menores delincuentes y establecimientos especiales (correccionales) para los menores descarriados y los culpables de actos socialmente peligrosos.

268. Existe la intención de que el Gobierno de la Federación de Rusia constituya una comisión interministerial para asuntos de menores que coordine las actividades de los ministerios y departamentos rusos para la prevención de la vagancia y delincuencia juvenil.

269. La cuantía de las prestaciones e indemnizaciones sociales a las familias con hijos aumentó repetidamente en 1992-1993 y se revisó el sistema de pagos en aplicación del Decreto Presidencial n° 2122 de 10 de diciembre de 1993 "Revisión

del Sistema de las Prestaciones Sociales Estatales a las Familias con Hijos y Aumento de su Cuantía". Las prestaciones abonadas fueron sustituidas el 1 de enero de 1994 por un pago mensual único para cada hijo hasta los 16 años de edad (hasta el final de la escolarización para los que asistan a los establecimientos de educación general básica). La cuantía del subsidio se fija en relación con la edad del niño: 70 por ciento del salario mínimo hasta 6 años, 60 por ciento entre 6 y 16 años de edad. Este subsidio se aumenta en el 50 por ciento para los hijos de las madres solteras, los hijos de los padres que se niegan a pagar su manutención, y también los hijos de los miembros de las fuerzas armadas que están en filas.

270. En aplicación de la Ley "Ciudadanía en la Federación de Rusia" de 28 de noviembre de 1991 (enmendada por la Ley de la Federación de Rusia de 17 de junio de 1993) un niño cuyos padres eran ciudadanos de la Federación de Rusia en el momento del nacimiento del niño es ciudadano de la Federación de Rusia, con independencia del lugar de nacimiento (artículo 14). En el caso de los padres con nacionalidades distintas, uno de los cuales sea ciudadano de la Federación de Rusia en el momento del nacimiento del niño, se determina la cuestión de la ciudadanía del hijo, independientemente del lugar de nacimiento, mediante un acuerdo escrito por parte de los padres. A falta de dicho acuerdo, el niño adquiere la ciudadanía de la Federación de Rusia si ha nacido en el territorio de dicho país o si de lo contrario se convertiría en un apátrida (artículo 15). El niño nacido en el territorio de la Federación de Rusia de padres ciudadanos de otros Estados es ciudadano de la Federación de Rusia a no ser que dichos Estados le concedan su ciudadanía (artículo 17).

271. Cuando cambia la ciudadanía de los padres, también cambia la de los hijos. En el caso de que uno de los padres mantuviera la ciudadanía de la Federación de Rusia, la ciudadanía del hijo no sufre modificación. A petición de un padre cuya ciudadanía se haya extinguido y con el acuerdo escrito del padre que sigue siendo ciudadano de la Federación de Rusia, el niño deja de ser ciudadano de la Federación de Rusia, a condición de que se le ofrezca otra ciudadanía (artículos 26 y 28).

272. La ciudadanía de los hijos hasta 14 años de edad sigue la ciudadanía de los padres, pero la de los niños de edades comprendidas entre 14 y 18 años sólo puede ser cambiada con su acuerdo (artículo 25).

273. Las disputas entre los padres referentes a la nacionalidad de los hijos serán examinadas por un tribunal, atendiendo a los intereses del hijo (artículo 31).

274. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 10 de la Ley "Libertad de Religión" el niño tiene el derecho a expresar libremente su opinión y al derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión. El Estado respeta la libertad del niño y de sus padres o guardianes legales para la educación religiosa y moral del niño de conformidad con sus creencias y su libre elección.

Artículo 25

275. Varios de los derechos civiles concretos especificados en este artículo del Pacto están consagrados en el artículo 32 de la Constitución. Así, el derecho civil a participar en la dirección de los asuntos públicos está previsto en el párrafo 1 del artículo 32, en el cual, aunque no se indica que los

representantes se "elegirán libremente", del contexto de otras disposiciones de la Constitución se desprende que esta es la intención. La participación en la gestión de los asuntos públicos está garantizada también por el párrafo 5 del artículo 32 que establece: "Los ciudadanos de la Federación de Rusia tendrán el derecho a participar en la administración de justicia".

276. Con el fin de asegurar la interacción entre las autoridades federales y las asociaciones públicas en la preparación de las decisiones del Presidente y el Gobierno sobre los temas sociales y políticas más importantes, se creó la Cámara de Opinión Pública de conformidad con la ordenanza Presidencial del 17 de febrero de 1994 "Cámara de Opinión Pública del Presidente de la Federación de Rusia".

277. Los ciudadanos del país disfrutan del derecho a elegir y a ser elegidos a los órganos estatales y órganos de las administraciones locales, con la excepción de los ciudadanos cuya incapacidad ha sido declarada por los tribunales y los que se encuentran confinados a consecuencia de una sentencia judicial.

278. De conformidad con la Ley "Estatuto de los Miembros de las Fuerzas Armadas" (artículo 9) dicho derecho corresponde también a los ciudadanos de dicha categoría. Se han adoptado medidas legislativas para determinar las características especiales de la condición jurídica de los miembros de las fuerzas armadas elegidos para dichos órganos.

279. La igualdad de acceso de los ciudadanos a la Función Pública de Rusia está garantizada por el párrafo 4 del artículo 32 de la Constitución y se rige por el Reglamento de la Función Pública Federal aprobado por el Decreto del Presidente de Rusia nº 2267 de 22 de diciembre de 1993. El análisis de la aplicación práctica de las disposiciones de este Reglamento permitirá posteriormente redactar la ley apropiada.

280. El Reglamento se basa en el principio de la igualdad de acceso a la Función Pública para los ciudadanos de la Federación de Rusia, de conformidad con sus aptitudes y formación, sin discriminación. El solicitante de un puesto en la Administración Pública debe poseer una educación y formación correspondientes a las exigencias del puesto (párrafo 5 de la sección II). Las calificaciones necesarias para cada puesto se especifican para los grupos de puestos superiores por decisión del Presidente, y para los demás puestos por el Gobierno de Rusia o en su nombre, el órgano estatal apropiado (párrafo 6 de la sección II). En la admisión a la Función Pública no se permiten "restricciones directas o indirectas cualesquiera por motivos de raza, sexo, nacionalidad, idioma, origen social, condición de propietario, lugar de residencia, actitud hacia la religión, creencias, o pertenencia a las asociaciones públicas" (párrafo 21 de la sección IV).

281. En la práctica quedarán muchos problemas por resolver fuera del alcance del Reglamento, en especial los referentes a la incompetencia, ineficiencia, falta de motivación y corrupción por parte de la maquinaria estatal, la inestabilidad de la organización a todos los niveles, y la insuficiencia del carácter no sistemático de la legislación y del reglamento que rige la Función Pública. Los puntos más destacados de una "Reforma de la Administración Pública de la Federación de Rusia" publicados en la "Russkaia gazeta" de 23 de diciembre

de 1993 quedaron abiertos a debate público con la idea de adelantar el trabajo práctico en este campo.

Artículo 26

282. La igualdad ante la ley y el derecho a la protección igual están garantizados en el artículo 19 de la Constitución, como ya se observó anteriormente con relación a los artículos 2 y 3 del Pacto. La forma de dar expresión al principio de la no discriminación se describe en relación con los artículos 14, 23 y 25 del Pacto, así como en el Informe sobre la aplicación en la Federación de Rusia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Artículo 27

283. El apoyo y protección a los derechos de los miembros de las minorías y pequeñas naciones contribuye a la estabilidad social del Estado. Además, dichas medidas están consideradas no solamente como la protección "negativa" de las minorías sino también en su aspecto de protección "positiva". Las relaciones que afectan a los derechos de las minorías nacionales y las naciones pequeñas están reguladas a dos niveles en la Federación de Rusia: a nivel federal y a nivel de los miembros de la Federación.

284. El párrafo 3 del artículo 68 de la Constitución refuerza la garantía concedida a todos los pueblos del país con respecto a su derecho a "preservar su lengua materna, y de establecer las condiciones para su estudio y cultivo".

285. Entre la legislación de la Federación de Rusia que contiene disposiciones sobre los derechos de las minorías y pueblos indígenas de pequeña importancia numérica figuran, *inter alia*, la Declaración de la Soberanía Estatal de la RSFSR de 12 de junio de 1990, la Declaración sobre Derechos Humanos y Civiles de 22 de noviembre de 1991, las constituciones de las repúblicas y sus declaraciones de soberanía estatal, así como los tratados de varias repúblicas y la legislación de las provincias y territorios que constituyen la Federación de Rusia. Las obligaciones del Estado para proteger la individualidad cultural y lingüística de las minorías en la Federación de Rusia se definen también en la Ley "Las Lenguas de los Pueblos de la RSFSR" de 25 de octubre de 1991, la "Ley de Educación" de 10 de julio de 1992, y los "Principios de la Legislación de la Federación de Rusia sobre Cultura" de 9 de octubre de 1992 y otras medidas.

286. La Constitución de la Federación de Rusia garantiza no solamente el principio de la igualdad de derechos de los ciudadanos independientemente de su nacionalidad (artículo 19) sino también el derecho a determinar libremente y especificar su nacionalidad, el derecho a utilizar su lengua vernácula, la libertad de elegir el lenguaje de comunicación, educación y expresión creativa (artículo 26). La Constitución prohíbe toda forma de restricciones de los derechos civiles basadas en la raza, nacionalidad, lengua y religión (artículo 19).

287. La Declaración de la Soberanía Estatal de la RSFSR de 12 de junio de 1990 concede una importancia especial a garantizar el derecho de cada pueblo de la República a la libre determinación en las formas estatales nacionales y culturales de su elección.

288. Algunos derechos especiales que podrían clasificarse de medidas para la protección "positiva" de las minorías están consagradas también en algunas de los demás instrumentos legislativos mencionados anteriormente. Así, los principios de la legislación de la Federación de Rusia sobre la cultura confirman y amplían el derecho de los pueblos y otras comunidades étnicas a preservar y desarrollar su individualidad cultural y nacional, a la protección, restauración y preservación de su entorno cultural e histórico así como el derecho de estas comunidades étnicas a la autonomía cultural y nacional.

289. La Ley "Lenguas de los Pueblos de la RSFSR" garantiza el derecho de las minorías nacionales a utilizar su lengua nativa. La Ley "Educación" de la Federación de Rusia garantiza el derecho de las minorías a la educación en su idioma nativo, y la Ley "Empleo" exige al Estado a llevar a cabo una política pública encaminada a asegurar el empleo en los lugares en que viven estos pueblos y nacionalidades, teniendo en cuenta las características nacionales de su actividad económica y cultural y también los tipos de empleo condicionados históricamente.

290. El artículo 69 de la Constitución manifiesta que la Federación de Rusia "garantizará los derechos de los pueblos indígenas donde las poblaciones son pequeñas de conformidad con los principios universalmente reconocidos y otras reglas del derecho internacional y los tratados internacionales en los que la Federación de Rusia sea Parte", mientras el artículo 71 define los asuntos referentes a la regulación y protección de los derechos de las minorías nacionales, el establecimiento de los principios de la política federal y los programas federales en materia de desarrollo cultural y nacional del país como asuntos de competencia federal. De conformidad con el artículo 72 de la Constitución, la protección de los derechos de las minorías nacionales y la protección del habitat ancestral y el estilo de vida tradicional de las comunidades étnicas pequeñas cae dentro de la competencia conjunta de la Federación de Rusia y de los miembros de la Federación de Rusia. La explicación de ello es el carácter universal de este problema para todas las regiones, por un lado y la complejidad de la situación étnica y política en muchos de los miembros de la Federación de Rusia y la necesidad de adoptar decisiones diversas, por otro lado. En varias regiones se ha progresado considerablemente en la resolución de los problemas de las minorías. Al mismo tiempo, la mayoría de los miembros de la Federación carecen de una política claramente definida a este respecto.

291. La República de Sakha (Yakutia) puede citarse como ejemplo especial de una de las regiones en las que se ha intentado resolver a nivel jurídico los problemas de las minorías nacionales y pueblos indígenas de población reducida. La Constitución de la República de Sakha (Yakutia) adoptada el 4 de abril de 1992 comprende, además de las disposiciones generales sobre la igualdad de derechos de todos los pueblos que habitan la República, un conjunto de artículos referentes a las garantías de los derechos de los pueblos cuya población es pequeña. Comprenden el derecho a poseer y utilizar tierra y recursos naturales, incluida la tierra agrícola tribal y territorios de caza, y la protección contra la invasión de la individualidad étnica, parajes históricos, los monumentos religiosos y de otro índole. La Constitución garantiza la preservación y regeneración de los pueblos indígenas de la República (artículo 42) y del lenguaje, cultura nacional e individualidad (artículo 49).

292. La Constitución de la República de Bashkortostán, adoptada el 6 de enero de 1994, prohíbe el uso de los derechos y libertades de los ciudadanos de la República para incitar al odio racial, nacional y religioso (artículo 18); y todas las formas de restricción de los derechos civiles por motivos de raza, nacionalidad, lenguaje o religión (artículo 20). Proclama que los ciudadanos de la República tienen derecho a decidir y especificar su nacionalidad y que nadie puede ser obligado a decidir y especificar su nacionalidad. Los ciudadanos tienen el derecho a elegir libremente el lenguaje de comunicación, utilizar su lenguaje nativo y ser enseñados y educados en su lenguaje nativo (artículo 35). La República reconoce y garantiza derechos iguales para la preservación y cultivo de los lenguajes de todos los grupos nacionales que habitan en el territorio, y crea la posibilidad de su libre desarrollo (artículo 36). Las comunidades étnicas que viven en la República tienen el derecho a establecer sus asociaciones culturales nacionales; la República garantiza la preservación y desarrollo de las culturas nacionales de los pueblos que viven en su territorio (artículo 53).

293. En una serie de repúblicas, como por ejemplo en Khakassia, en Buryatia y Tatarstán, se han adoptado leyes sobre el idioma que proclaman el derecho de las minorías nacionales y pueblos de población reducida a utilizar sus idiomas nativos. Varios miembros de la Federación de Rusia están introduciendo reglamentos sobre el establecimiento y actividad de las entidades territoriales nacionales (por ejemplo, la Ley de la República de Carelia de 22 de noviembre de 1991 "Condición Jurídica de las Regiones Nacionales y de los Consejos de Asentamiento Nacional y Consejos Rurales en la República de Carelia"; la Ley de la SSR Buryat de 24 de octubre de 1991 "Condición Jurídica de los Consejos Rurales Evenki (asentamiento) de los Diputados del Pueblo en el Territorio de la SSR de Buryat"; la Decisión del Presidium del Consejo del Territorio de Kemerovo de los Diputados del Pueblo de 20 de noviembre de 1991 "Reglamento Provisional del Consejo Rural Nacional (Aimak)". También se están adoptando reglamentos sobre la organización y actividades y formas de autogobierno nacional para las comunidades tribales nómadas (por ejemplo, la Ley de 23 de diciembre de 1992 sobre la tribu nómada de los pueblos del norte de población reducida; el estatuto sobre el regimen jurídico de los pastos tribales en la región autónoma de Khanty-Mansi, adoptada en la quinta reunión de la XXI convocatoria del Consejo de los Diputados del Pueblo de la Región Autónoma de Khanty-Mansi de 7 de febrero de 1992, etc.

294. Estas normas están de acuerdo con las reglas internacionales sobre derechos humanos y los derechos de las minorías nacionales, y elevan la condición jurídica de los ciudadanos a la esfera nacional al nivel de las normas internacionales. Al mismo tiempo, la legislación actual es claramente inadecuada y tiene que desarrollarse especialmente. Las dificultades en este caso residen en superar problemas predominantemente económicos y técnicos (v.g. la aplicación del derecho a recibir la educación en el idioma nativo). La Federación de Rusia reconoce la necesidad de una realización más eficaz de los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos de las minorías nacionales y tratará de garantizarlos mediante el ulterior desarrollo de su propia legislación.

295. En la Federación de Rusia no se ha definido todavía un concepto común de la política jurídica para la defensa de los derechos e intereses de las minorías en el contexto ruso que tenga en cuenta tanto la experiencia internacional como las características especiales de Rusia. La adopción de los Principios

Legislativos de la Federación de Rusia sobre las Minorías es un proceso largo; estos principios deberían abarcar la totalidad de las garantías esenciales para la protección de los derechos e intereses de las minorías en Rusia, en conjunción con los derechos civiles y humanos fundamentales, libertades y obligaciones. Los principios de la legislación de la Federación de Rusia sobre la condición jurídica de los pueblos indígenas de población reducida están en vías de redacción y no se han adoptado todavía. La adopción de esta legislación conduciría al establecimiento de un nivel común de reglamentación de las relaciones referentes a la condición jurídica de las minorías nacionales y pueblos poco numerosos en todas las regiones de la Federación de Rusia, que constituiría la base para el ulterior desarrollo regional de estas relaciones.

296. La compleja estructura étnica de la población y las características específicas de la estructura estatal de Rusia nos obligan a definir lo que se entiende por el concepto de "minoría nacional". En el planteamiento adoptado se hace hincapié, en primer lugar, en las comunidades étnicas que viven en el territorio de Rusia y tiene sus propias formaciones estatales fuera de sus límites (belorusos, ucranos, kazajs, kirgizios, uzbekios y otros); en segundo lugar se trata de las comunidades étnicas que viven en el territorio de Rusia, que no tienen todavía su formación estatal ni en Rusia ni en otra parte (gitanos, asirios, kurdos y otros); en tercer lugar figuran las comunidades étnicas que viven fuera de su estado nacional y de las formaciones territoriales en Rusia (los carelios que viven fuera de la República de Carelia, los mordvinianos que viven fuera de la República de Mordvinia).

297. El interés en proteger los derechos nacionales de las minorías está relacionado con el proceso de restablecimiento y reforzamiento del acuerdo entre las nacionalidades en Rusia, que debe tener en cuenta las características étnicas, económicas y regionales y conciliar los intereses de los grupos étnicos y nacionales en la transición de un sistema totalitario y rígidamente centralizado de las relaciones federales a un marco más asimétrico para dichas relaciones. En este proceso ocupa un lugar especial el Tratado Federal, en el cual la reglamentación y protección de los derechos de las minorías nacionales se encomienda a los órganos del Estado Federal, mientras la protección de los derechos de las minorías nacionales en las Repúblicas miembros de la Federación es de responsabilidad conjunta de dichos órganos y de los órganos estatales de las repúblicas constituyentes. Este planteamiento viene confirmado por la Constitución (artículos 71 y 72). El acuerdo entre la Federación de Rusia y la República de Tatarstán, establece la condición especial de esta república en la Federación, deja la regulación y protección de los derechos de las minorías nacionales en manos de la Federación, pero incluye la protección de los derechos y libertades humanos y civiles entre los poderes de los órganos estatales de la República de Tatarstán, sin hacer referencia expresa a los derechos de las minorías nacionales, si bien la tarea de asegurar la armonía entre las naciones y la seguridad de los pueblos se menciona en el Preámbulo, junto con la prioridad de los derechos humanos y civiles fundamentales y libertades independientemente de la nacionalidad, religión, lugar de residencia y otras diferencias. A este nivel se atribuye importancia al acuerdo estipulado en el Artículo III del Tratado Federal de que los miembros de la Federación poseen toda la gama de poderes estatales que quedan fuera de los límites de las atribuciones asignadas a los órganos federales.

298. La armonía entre las naciones se consigue en Rusia en el contexto de la definición de las prioridades de la política nacional y la formación del

concepto de federalismo ruso. A este nivel existe una amenaza superviviente de los principios federales del Estado por parte del nacionalismo agresivo que opone los intereses de los diversos grupos étnicos y nacionales a los del pueblo ruso multinacional. En el contexto del conflicto Ossetio-Ingush las autoridades de Rusia están tratando de superar las tendencias que permiten a los individuos azuzar la discordia entre los pueblos y generar extremismos nacionales y tensiones en la zona en que existe el estado de excepción para eludir la responsabilidad (véase también el texto en relación con los artículos 1, 4 y 20 del Pacto).

299. En los debates del Gobierno de Rusia sobre el documento "Conceptos de Política Nacional en la Federación de Rusia" no hubo apoyo por un planteamiento que conduciría a la abolición de las formaciones estatales nacionales actuales en Rusia y la división del país en fronteras nacionales. Se atribuye gran importancia al mensaje del Presidente de la Federación de Rusia del 24 de febrero de 1994 quien dijo que ningún grupo étnico puede tener el derecho exclusivo de controlar el territorio, las instituciones de poder y los recursos.

300. La redacción de un convenio multilateral sobre garantías para los derechos de los individuos que pertenecen a minorías nacionales o étnicas, lingüísticas y religiosas está casi terminado y han comenzado las negociaciones sobre la viabilidad de suscribir acuerdos bilaterales en este campo. El 9 de octubre de 1992 se firmó un acuerdo multilateral sobre los asuntos referentes a la restauración de los derechos de las personas, minorías nacionales y pueblos deportados.

301. Con arreglo a la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Etnicas, Religiosas y Lingüísticas adoptada en 1992 en el Cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se firmó una Declaración sobre los principios de cooperación entre la Federación de Rusia y la República de Hungría sobre las garantías para los derechos de las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas el 11 de noviembre de 1992.